

Percepción de la seguridad y apoyo a la democracia en Centroamérica y República Dominicana

Personas autoras

Wendy Alas

Manuel Delgado

Alejandra Quintanilla



Percepción de la seguridad y apoyo a la democracia en Centroamérica y República Dominicana



Red de Conocimiento sobre Seguridad Ciudadana (CONOSE)

Percepción de la seguridad y apoyo a la democracia en Centroamérica y República Dominicana

Comité Coordinador:

FLACSO Costa Rica: Ilka Treminio Sánchez

Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo: Manuel Delgado

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas: Mario Zetino

Secretaría Técnica: Carlos Guillermo Ramos González y Karla Salazar Sánchez

Autores:

Wendy Alas

Manuel Delgado

Alejandra Quintanilla

Revisión filológica: Karen Martínez

Diseño y diagramación: Pamela Abrego



Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo brindado por el pueblo de los Estados Unidos por medio de la *Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional* (USAID, por sus siglas en inglés), y a la asistencia técnica del Centro Regional para América Latina y el Caribe del *Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo* (PNUD LAC). Las opiniones y los puntos de vista que se presentan en este documento son exclusiva responsabilidad de sus autores y autoras, y no reflejan necesariamente los de USAID, del Gobierno de los Estados Unidos, del PNUD o de los países miembros de las Naciones Unidas.

Percepción de la seguridad y apoyo a la democracia en Centroamérica y República Dominicana

320.23

A322p

Alas, Wendy

Percepción de la seguridad y apoyo a la democracia en Centroamérica y República Dominicana [recurso electrónico] / Wendy Alas, Manuel Delgado, Alejandra Quintanilla. -- primera edición -- San José, Costa Rica : FLACSO, 2024.

E-book ; pdf : 2,45 Mb

ISBN 978-9977-68-365-2

1. DEMOCRACIA – AMÉRICA CENTRAL. 2. DEMOCRACIA - REPÚBLICA DOMINICANA. 3. SEGURIDAD CIUDADANA – POLÍTICA GUBERNAMENTAL – AMÉRICA CENTRAL. 4. SEGURIDAD CIUDADANA – POLÍTICA GUBERNAMENTAL – REPÚBLICA DOMINICANA.

I. Delgado, Manuel. II. Quintanilla, Alejandra. III. Título.

Este estudio se llevó a cabo en el marco del programa de investigación de la Red de Conocimiento sobre Seguridad Ciudadana (CONOSE).

Editorial FLACSO Costa Rica, 2024



La Red CONOSE surgió en el año 2015, a partir del Foro Regional “Gestión de conocimiento en seguridad ciudadana: una mirada desde la sociedad civil”, como una respuesta a la necesidad de articular una serie de instituciones que abordan el tema de seguridad ciudadana. Su objetivo es promover espacios de reflexión y colaboración para la generación de evidencia rigurosa en materia de violencia y criminalidad, con el fin último de orientar la toma de decisiones de políticas públicas que abordan dichas problemáticas.

Corolario de lo anterior, una de las líneas de trabajo fundamentales de la Red es el apoyo a la investigación académica para fortalecer los abordajes metodológicos, analíticos y prácticos en materia de violencia y seguridad ciudadana, sobre la base de información actualizada, contextualizada y con los más altos estándares de calidad.

Tanto la mayor incidencia del crimen y el delito, como la mayor percepción de inseguridad juegan un rol fundamental en el apoyo que los ciudadanos dan a las instituciones democráticas de la región, en lo cual se basa la reflexión de la presente investigación.

Contenido

Introducción	10	2.3. Percepción de inseguridad	29
1. Contexto para el análisis de la seguridad y confianza en las instituciones democráticas	12	2.4. Confianza en las instituciones	35
1.1 Evolución de las muertes violentas en Centroamérica y República Dominicana	13	2.5. Determinantes del apoyo a la democracia y la percepción de inseguridad	48
1.2. Intervenciones de seguridad ciudadana implementadas por los gobiernos de los países de Centroamérica y República Dominicana	16	3. Conclusiones	59
1.3. Confianza institucional y democracia	18	4. Bibliografía	61
2. Análisis de victimización, percepción de la inseguridad y confianza en las instituciones democráticas en Centroamérica, y la República Dominicana de 2008 a 2021	20	5. Anexos	70
2.1. Fuentes de información	21	5.1. Tasas de homicidio	70
2.2. Evolución de la victimización por delincuencia	22	5.2. Correlación entre victimización por delito y percepción de la inseguridad y confianza en las instituciones de gobierno.	73
		5.3 . Correlaciones entre la victimización por delito y la percepción de inseguridad características sociales.	75
		5.4. Resumen de estrategias de seguridad ciudadana por país	76
		6. Sobre las personas autoras	86

Índice de cuadros

Cuadro 1. Muestras y errores muestrales LAPOP lab	21
Cuadro 2. Predictores del apoyo al funcionamiento de la democracia y la confianza interpersonal en Centroamérica y República Dominicana, 2021.	49

Índice de gráficos

Gráfico 1. Tasa de Homicidios por cada 100,000 habitantes en Centroamérica y República Dominicana 2011-2022	15	Gráfico 3. Tasas de victimización por delincuencia, desagregada por sexo, 2008-2021	24
Gráfico 2. Tasas de victimización por delincuencia, 2008-2021	23	Gráfico 4. Tasas de victimización por delincuencia, desagregada para indígenas, afrodescendientes, mestizos o blancos, 2008-2021	26

Gráfico 5. Tasas de victimización por delincuencia, desagregada por área de residencia, 2008-2021	28	Gráfico 13. Indicador de confianza en la policía	38
Gráfico 6. Porcentaje de personas que identificaron el principal problema del país relacionado con la seguridad.	29	Gráfico 14. Indicador de confianza en el sistema judicial	39
Gráfico 7. Porcentaje de personas que consideran que viven en un barrio inseguro o muy inseguro	30	Gráfico 15. Indicador de confianza en el presidente	40
Gráfico 8. Porcentaje de personas que consideran que viven en un barrio inseguro, por sexo, 2008-2021	31	Gráfico 16. Porcentaje de personas que expresan confianza por los medios de comunicación	41
Gráfico 9. Percepción de inseguridad del barrio de residencia, desagregada para indígenas, afrodescendientes, mestizos o blancos, 2008-2021	32	Gráfico 17. Porcentaje de personas que apoyan el uso de la justicia por mano propia	42
Gráfico 10. Personas que consideran que viven en un barrio inseguro, por área de residencia, 2008-2021	34	Gráfico 18. Evolución del índice de apoyo a la democracia, 2008 - 2021	43
Gráfico 11. Indicador de respeto por las instituciones políticas del país	36	Gráfico 19. Evolución del índice de apoyo al sistema democrático, 2008 - 2021	44
Gráfico 12. Porcentaje de personas que consideran que sus derechos están protegidos	37	Gráfico 20. Evolución del índice de satisfacción con el funcionamiento de la democracia, 2008 - 2021	45
		Gráfico 21. Porcentaje de personas que consideran que la democracia es la mejor forma de gobierno	46
		Gráfico 22. Evolución del índice de apoyo al sistema democrático, 2008 - 2021	47

Gráfico 23. Valores promedio del Indicador de Apoyo la Democracia por victimización y percepción de inseguridad en el barrio, 2021 52

Gráfico 24. Valores promedio de los Indicadores de Apoyo al Sistema Democrático y de Satisfacción con la Democracia por percepción del principal problema del país, 2021 54

Gráfico 25. Valores promedio del Indicador de Confianza Interpersonal por victimización y percepción de inseguridad en el barrio, 2021 56

Introducción

Centroamérica y República Dominicana enfrentan importantes desafíos para garantizar la seguridad ciudadana en sus respectivas sociedades. Si bien muchos de los retos son comunes, El Salvador, Guatemala y Honduras se han caracterizado por mayores tasas de homicidio, victimización por delito y mayor percepción de inseguridad que Costa Rica, Panamá y República Dominicana. A pesar de las diferencias entre los países, los niveles de victimización por delito han aumentado en toda la región y de igual manera se ha empeorado la percepción de seguridad por parte de sus ciudadanos. La mayor prevalencia de la victimización por delitos no sexuales (robo, hurto, agresión, fraude, chantaje, extorsión, amenazas o algún otro tipo de acto delincuenciales) se da entre los hombres, la población indígena y los afrodescendientes y entre los residentes de las áreas urbanas, aunque se ha incrementado la prevalencia en las áreas rurales.

Tanto la mayor incidencia del crimen y el delito, como la mayor percepción de inseguridad juegan un rol fundamental en el apoyo que los ciudadanos dan a las instituciones democráticas de la región. Para evaluar este vínculo utilizamos la abundante información disponible de las encuestas del Barómetro

de las Américas realizadas por LAPOP lab (2008a – 2021f). Estas encuestas permiten medir la prevalencia de victimización por delitos no sexuales, la percepción de inseguridad y la confianza en las instituciones democráticas en seis países de la región¹, comparando su evolución en cuatro puntos del tiempo (2008, 2012, 2016/2017 y 2021).

Las encuestas de LAPOP lab dan cuenta de una erosión en el apoyo de los ciudadanos a la democracia como la mejor forma de gobierno y en la satisfacción que tienen respecto a los logros de esta (Córdova et al, 2021) así como aumenta la tolerancia a la centralización del poder en el Órgano Ejecutivo (Lupu et al, 2021, p 2). Los seis países analizados no escapan a la tendencia latinoamericana y presentan una erosión al apoyo a la democracia.

El documento se estructura en tres grandes apartados, el primero resume los principales conceptos de seguridad en el análisis, la evolución reciente de las tasas de homicidio en la región y las principales respuestas estatales en materia de seguridad pública. El segundo analiza, a partir de los datos de LAPOP lab, la evolución de la victimización por delito, percepción de seguridad y confianza

1 Este análisis incluye únicamente a seis de los ocho países de la región SICA: Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana, pero se espera que en futuras investigaciones se pueda incluir a Belice y Nicaragua.

en las instituciones democráticas en la región, finalizando con un análisis multivariado de los determinantes del apoyo a la democracia. El tercer apartado resume las principales conclusiones.

Finalmente, los autores agradecen el apoyo de Marcia Isela Galindo en la búsqueda y sistematización de información.

1. Contexto para el análisis de la seguridad y confianza en las instituciones democráticas

El Observatorio de Seguridad Ciudadana (2013), señala que la percepción de inseguridad está ligada a la experiencia de vida de las personas y no necesariamente está correlacionada con una evaluación general de la realidad, que se ve influenciada por lo que sucede en su contexto, así como por la forma en que lo interpreta, las sensaciones y valoraciones que tiene del mismo. En este sentido, la percepción de seguridad se trata de una imagen de qué tan seguras se sienten las personas de ser víctima de alguna expresión de violencia.

Por otro lado, al hablar de victimización se hace referencia a un hecho objetivo, precisamente Cruz (1999, citado en Observatorio de Seguridad Ciudadana, 2013) explica que la victimización ocurre cuando una persona recibe un daño físico o psicológico como producto del uso de la fuerza. Por su parte, Hernández *et al* (2020), entiende por victimización a todos aquellos procesos en los que las personas sufren un hecho traumático como resultado de acciones u omisiones donde se ve involucrado un proceso penal.

Hernández *et al* (2020), también señalan la existencia de tres niveles de victimización: en el nivel primario están las víctimas directas de los crímenes, la experiencia personal del suceso; en segundo lugar, se encuentra el nivel de

victimización que se da en la relación de la víctima con el sistema jurídico-penal al hacer uso de su derecho dando a conocer a las autoridades el hecho criminal. En tercer lugar, se encuentra el nivel donde la victimización se produce sobre los delincuentes, esta victimización se da por parte de las instituciones.

Según Thomé (2004), la victimización primaria no sólo afecta la lesión, pérdida de patrimonio, pérdida de la vida, etc., sino que, a raíz de estas situaciones vividas, la población puede encontrar sentimientos de impotencia al percibir que tiene poco o nulo control sobre las experiencias de violencia o temor a volverse a encontrar en situaciones similares a las vividas. Estos sentimientos tienen repercusión sobre el comportamiento de los individuos, alterando su vida diaria y sus relaciones con su entorno y con las demás personas. El miedo al delito que tiene la población se manifiesta de forma individual, por el impacto que tiene en el comportamiento de la cotidianidad de las personas (pueden evitarse situaciones, dejar de hacer actividades, entre otros); y de manera colectiva, donde se pueden presentar repercusiones en la vida comunitaria (abandono de espacios públicos, reducción de la interacción social, etc.) (Toledo, s.f.). En la **victimización secundaria** se confrontan las expectativas de la persona afecta-

da, con la realidad institucional. Las consecuencias acá pueden ser mayores en cuanto hay más posibilidad de frustración respecto al resultado que se obtiene al acceder al apoyo de las instituciones (Thomé, 2004).

Estas dos dimensiones, la objetiva y la subjetiva respecto a la seguridad ciudadana, pueden ocasionar una conciencia en las personas de la gravedad de las situaciones, o bien una sobredimensión de lo que sucede, así como una percepción por debajo de lo que la realidad presenta (Toledo, s.f.).

Independientemente de la evaluación que las personas realicen sobre estas dos dimensiones, existe una relación de retroalimentación entre el miedo al delito y la confianza que se tiene en las instituciones públicas. Los altos niveles de delincuencia y de percepción de inseguridad e impunidad provocan una

baja confianza institucional, de forma especial en aquellas entidades a cargo del control social como la policía y sistemas de justicia (Dammert, 2017, citado en Ministerio de Gobernación de Guatemala, MINGOB, 2019).

Dammert y Malone (2006, citado en MINGOB, 2019), encontraron que la victimización era una variable predictora del miedo al delito. Pero a este último, también se asocian elementos como la falta de confianza en instituciones de justicia y seguridad ciudadana y los bajos niveles de cohesión social. El debate político respecto a los niveles de temor al delito en la región centroamericana ha llevado a estrategias de seguridad ciudadana donde se privilegian medidas que resulten efectivas en el cambio de la percepción de la seguridad de la población como son las acciones represivas, que logren impactos en la opinión pública.

1.1 Evolución de las muertes violentas en Centroamérica y República Dominicana

El Estudio Mundial sobre Homicidios de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), señala a Centroamérica como una de las regiones con mayores índices de criminalidad y muertes violentas durante la última década. Particularmente, el fenómeno de los homicidios se comporta de forma heterogénea en la región (ver gráfica 1). Al hacer un recorrido por las tasas de homicidio y cómo han evolucionado en la última década se evidencia que ha sido la subregión norte centroamericana la que ha estado más afectada

por problemas de inseguridad y violencia. El Salvador y Honduras, seguidos de Guatemala, han registrado las tasas más altas de homicidio. El Salvador tuvo el pico más alto en 2015 cuando la tasa de homicidios fue de 106.3 por cada 100,000 habitantes, a partir de esta fecha la tasa disminuyó constantemente, hasta alcanzar las tasas más bajas durante 2021 y 2022. Por su parte, Honduras si bien aún mantiene una tasa alta, ha experimentado una disminución al pasar de 86.5 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2011 a 35.8 en 2022. Gua-

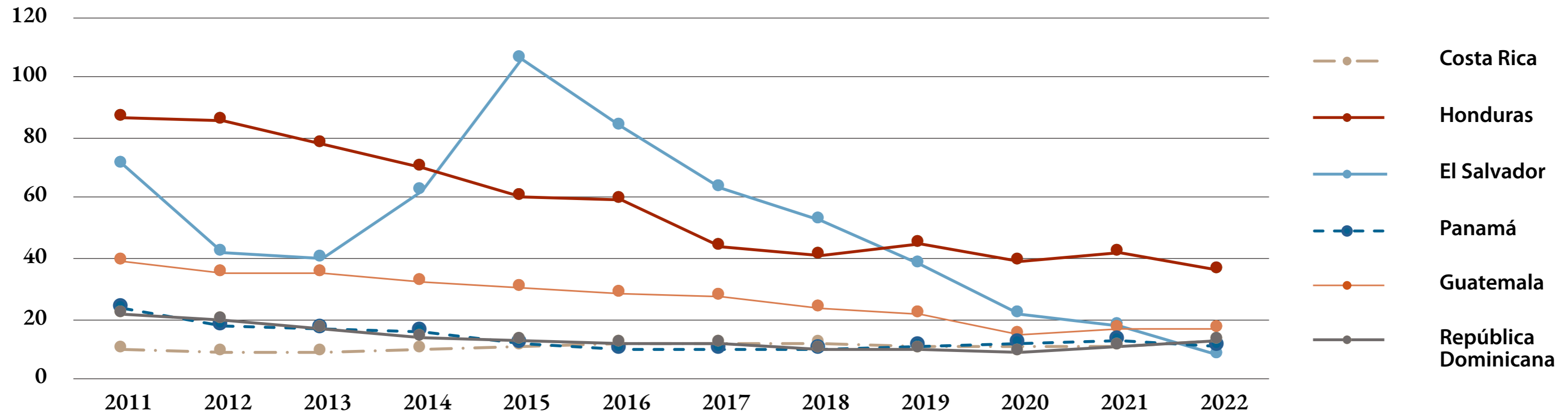
temala ha registrado tasas más bajas de homicidios que El Salvador y Honduras, sin embargo, se ubica en tercer lugar de esta subregión, mostrando el punto más alto en 2011 con una tasa de 39.1 muertes violentas por cada 100,000 habitantes y también disminuyó constantemente hasta llegar a 15.2 en el 2020, pero luego de la pandemia por Covid-19 se observa un aumento para el periodo 2021-2022.

En Panamá la tasa de homicidios disminuyó pasando de 23.3 a 10.3 por cada 100,000 habitantes en el periodo 2011-2017, a partir de ahí se ha registrado un aumento leve pero constante hacia 12.7 en el año 2021². Caso simi-

lar presenta República Dominicana, que en 2011 registraba una tasa de 21.9 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, lo cual disminuyó hasta llegar a 9.2 en 2020. Pero para el periodo 2021-2022 los datos oficiales para República Dominicana muestran un aumento en los homicidios. Finalmente, Costa Rica tiene una tasa de homicidios promedio de 11 por cada 100,00 habitantes, y esta ha oscilado poco en el período analizado, la tasa más alta fue de 12.6 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2022. De modo que en promedio la región ha pasado de una tasa de 61.6 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2011 a 43.1 en 2015, a 20.4 en 2020 y a 18.7 en 2022 (ver anexo 1).

2 El gráfico 1, no presenta los datos de Panamá por su traslape con otros países

Gráfico 1. Tasa de Homicidios por cada 100,000 habitantes en Centroamérica y República Dominicana 2011-2022



Fuente: elaboración propia con base en datos de Proyecto Regional Infosegura de PNUD (2011-2022), Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales Panamá (2011-2022), Observatorio Nacional de la Violencia UNAH (2012) y Portal de Transparencia FGR El Salvador (2018).

De acuerdo a PNUD (2021), en la región 25 personas perdieron la vida en promedio diario durante el año 2021 y 2022 respectivamente. En 2021, la tasa de homicidios de la región (19.3 por cada 100,000 habitantes) se colocó por primera vez desde el año 2010, por debajo de la de América Latina y el

Caribe (25.5). En 2022, la tasa de homicidios en la región de Centroamérica y República Dominicana se encuentra 2.0 puntos porcentuales por encima de la tasa latinoamericana (18.4 versus 16.4 muertes violentas por cada 1000,000 habitantes respectivamente) (PNUD, 2022).

1.2 Intervenciones de seguridad ciudadana implementadas por los gobiernos de los países de Centroamérica y República Dominicana

Centroamérica y República Dominicana, se enfrentan a diversos desafíos en materia de seguridad ciudadana: altos índices de violencia, altos niveles de exclusión social, violencia contra la mujer, debilidad de los marcos legales e institucionales para la aplicación de justicia, crimen organizado, grupos pandilleros y delincuencia común, que afecta de manera desproporcionada a las poblaciones con mayor vulnerabilidad. Estos problemas de seguridad representan altos costos económicos, sociales y políticos (Chinchilla y Vorndran, 2018) y se reflejan en una percepción generalizada de inseguridad, para Cullell (2007) la percepción de inseguridad no muestra grandes divergencias en la región, únicamente que en los países del norte de Centroamérica la población da más preponderancia a los problemas relacionados a la seguridad ciudadana por encima de otros, como los económicos, políticos, etc. En Guatemala, Honduras y El Salvador, los problemas de seguridad ciudadana han aparecido como las principales preocupaciones y situaciones a resolver desde la opinión de la población.

El crimen y la delincuencia también afectan a los países del sur de la región, sin embargo, los ciudadanos en Costa Rica y Panamá³ han tendido a señalar menos estas situaciones como prioritarias para la intervención pública a lo largo del periodo estudiado (2018-2021).

Chinchilla y Vorndran (2018) argumentan que en América Latina las respuestas estatales a los problemas de seguridad ciudadana se pueden agrupar en tres paradigmas diferenciados en el tiempo: 1) “Sálvese quien pueda”, 2) Mano dura y 3) Convivencia ciudadana y prevención. El primer paradigma atrasó la incorporación de la seguridad ciudadana a la agenda pública y se caracterizó por buscar soluciones de naturaleza privada e individual, dando pie a la proliferación de servicios de seguridad privada y a la segregación social de espacios. Una vez el problema de seguridad incrementa, el segundo paradigma, inspirado en el populismo punitivo, adoptó medidas represivas, a nivel legislativo, administrativo, judicial y comunitario⁴. Estas medidas resultaron en un incremen-

3 En las encuestas LAPOP la proporción de personas que identificaron la seguridad como principal problema pasó del 47.4% en 2008 al 2.3 % en 2021 en Costa Rica, del 31.4% en 2008 al 1.7% en 2021 en Panamá y del 19.4% en 2008 al 12.6% en 2021 en República Dominicana.

4 Bajo el paradigma de mano dura se implementaron en el plano legislativo nuevos tipos penales como la aplicación de penas que privan la libertad para nuevos delitos y la disminución de la edad de responsabilidad penal. En el plano administrativo, se crearon unidades especiales de Policía con nuevas facultades para la investigación y la detención del crimen, así como la incorporación de la Fuerza Armada y el cuerpo militar a actividades de las fuerzas policiales de carácter civil (Chinchilla y Vorndran, 2018).

to de la población penitenciaria y en un grave deterioro en las condiciones de internamiento. El tercer paradigma se caracteriza por centrarse en un enfoque basado en derechos humanos, defender el Estado de Derecho y reconocer la naturaleza multifactorial de la inseguridad y la violencia, sin embargo, Chinchilla y Vorndran (2018) señalan que a pesar de que en el área de la investigación y la doctrina del derecho se realizan avances, estos no se han incorporado tan rápido en la formulación de las políticas de seguridad. Centroamérica y República Dominicana han experimentado respuestas estatales en el orden de estos tres paradigmas, la región ha visto un marcado crecimiento de servicios de seguridad privada y mayor segregación social, y se han empleado estrategias más reactivas de mano dura, otras se han definido desde un enfoque preventivo y de construcción de soluciones con un fuerte componente en el fortalecimiento del estado de derecho, sin embargo este último paradigma no se ha incorporado con la celeridad necesaria.

En las últimas dos décadas, El Salvador, Honduras y Guatemala han dado prioridad a las medidas, políticas y acciones basadas en el paradigma de “mano dura”. Maydeu-Olivares (2016) hace referencia a políticas como el Plan Mano Dura (2003 – 2004), el Plan Super Mano Dura (2004 – 2009) y la remilitarización de la seguridad de 2009 a 2019 en El Salvador⁵, el Plan Libertad Azul (2001 a 2003) o Cero Tolerancia en Honduras, y en Guatemala al Plan Esco-

ba. Estas intervenciones tienen en común, el tratarse de incursiones militares dentro de la seguridad pública, que tienen por eje central la persecución de los grupos criminales, el aumento de las penas para ciertos delitos, así como el masivo encarcelamiento de miembros de pandillas. Chinchilla y Vorndran (2018), señalan que estas medidas, a pesar de contar con un alto apoyo de la opinión pública, tienen costos que sobrepasan sus beneficios y que después de una reducción de las tasas de homicidio estas vuelven a ser altas. También cabe mencionar que, el aumento de la población carcelaria ha puesto un peso mayor a la de por sí desgastada capacidad de los sistemas penitenciarios de los tres países en cuestión. Finalmente, a esto se suma, en años recientes, una expresión máxima de las políticas de mano dura como son los Estados de Excepción decretados en El Salvador y Honduras.

En cambio, en Costa Rica, Panamá y República Dominicana, si bien sus políticas se han influenciado por los tres paradigmas planteados por Chinchilla y Vorndran (2018), se observa que se da mayor prioridad a implementar estrategias con un enfoque de prevención de la violencia, construcción de espacios de convivencia ciudadana y fomento de la cultura de paz, y medidas de gestión local de la seguridad ciudadana que los países del norte, sin embargo estos países también han fortalecido la persecución del delito y el incremento en las fuerzas policiales⁶.

5 Para más detalle sobre la injerencia militar en las políticas de seguridad durante los períodos presidenciales 2009 – 2014 y 2014 – 2019 ver Aguilar (2019).

6 El Anexo 5.4 representa un primer esfuerzo de resumir para cada país las estrategias de seguridad ciudadana implementadas, basados en una revisión bibliográfica.

A nivel regional, y a través de la cooperación, se han implementado estrategias de seguridad comunes entre las que se encuentran: el fortalecimiento de las instituciones de seguridad: policía, sistema judicial y agencias de inteligencia, entre otros. Se implementaron programas de capacitación, modernización de equipos y tecnología, y se promovió una mayor coordinación entre las diferentes instituciones. Asimismo, un punto común ha sido la puesta en marcha de diversos planes y programas de prevención de la violencia en la juventud⁷ (Escotto, 2015).

Si bien, han sido abundantes las estrategias en materia de seguridad que se han implementado en la región en la última década, uno de los desafíos claves para su efectividad es la falta de recursos, capacidades y coordinación efectiva entre las instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana en los países centroamericanos. Así como la falta de personal capacitado, la corrupción y la falta de recursos dificultan la aplicación de políticas y programas eficaces para abordar los problemas de seguridad (Puerta, et al., 2021).

1.3 Confianza institucional y democracia

La percepción de seguridad que tiene la población va de la mano de la confianza que tienen en las instituciones públicas a cargo de garantizar la seguridad. En los países centroamericanos, las altas tasas de homicidio y los altos niveles de impunidad han llevado a que la ciudadanía exprese una baja confianza en las instituciones democráticas, sumado a que estas son de reciente creación. En Guatemala y El Salvador a partir de los procesos de paz se establecieron procesos de desmilitarización y se buscó separar las funciones de seguridad ciudadana y de defensa nacional. Es así como la institucionalidad en los temas de seguridad en el contexto del posconflicto pasó a la conformación de cuerpos policiales civiles, que aspiraban establecer principios democráticos y un enfoque en derechos humanos (Pastor, 2016). Sin embargo, los conflictos armados trajeron consigo el debilitamiento de los Estados, de acuerdo con Yates (2011), se manifiestan en la reducción de capacidades y credibilidad. El debilitamiento

7 De acuerdo con el informe “Políticas y prácticas de prevención de la violencia que afecta a la juventud en Centroamérica. Análisis comparativo” en Centroamérica, entre las experiencias exitosas de los programas implementados se encuentran: a. Programa Avancemos en Costa Rica que se concentró en transferencias condicionadas para reducir la deserción escolar, concentrándose en la finalización del nivel medio. b. Escuelas para la Convivencia en El Salvador, este programa se focalizó en menores de edad, incorporando programas relacionados con el arte, el deporte, la enseñanza de técnicas de resolución de conflictos minimizando el uso de la violencia, igualdad y equidad de género, y capacitaciones para aumentar la empleabilidad de las y los menores. c. Programa Escuelas Abiertas en Guatemala el programa consistió en la apertura de centros educativos los fines de semana para proporcionar a las y los jóvenes y sus comunidades oportunidades de formación, información y recreación en ambientes sanos.

económico y fiscal y, la escasa capacidad para garantizar el cumplimiento de la ley, son algunos de los elementos que Pastor (2016) relaciona con la existencia de comportamientos ilícitos y la presencia de estructuras criminales organizadas.

De León (2010) explica que los procesos de democracia en los Estados centroamericanos se expresan en la capacidad de gobernabilidad, la cual está basada en que el escenario social garantice seguridad. Esta seguridad debe verse desde una perspectiva integral como un derecho a proteger por parte del Estado. A pesar de los esfuerzos realizados por los gobiernos de la región centroamericana por recuperar e instaurar gobiernos democráticos no ha existido un ejercicio de ciudadanía efectiva, lo que se evidencia en el debilitamiento del sistema de partidos políticos, los marcos constitucionales y de Estado de Derecho. El deterioro de la seguridad ciudadana experimentado en los países centroamericanos, que ha registrado un mayor impacto en la subregión compuesta por Guatemala, Honduras y El Salvador durante los primeros años de la década 2010; estuvo causada por diferentes factores como, la transnacionalización del narcotráfico que ha trasladado sus operaciones al sur de la frontera mexicana, la cultura de violencia y las pandillas juveniles. Asimismo, el incumplimiento de los acuerdos para la transformación de las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana, la implementación de

medidas y políticas públicas de seguridad caracterizadas por el “manodurismo”, sumado a los altos índices de impunidad que impera en el ámbito de la justicia; ha influido de manera negativa en la población.

La Oficina de Washington para Latinoamérica, (WOLA por sus siglas en inglés, 2022), hace mención de elementos a considerar en la regresión democrática que se observa en la región centroamericana, manifestada en la falta de independencia en el sistema judicial, la reducción en la separación de poderes, los ataques a la prensa, la represión de voces disidentes, el cierre de espacios cívicos y de participación, entre otros. Esto lleva a la necesidad de investigar cuales son las causas de este deterioro en los sistemas democráticos, siendo una de las hipótesis la relación con la violencia social que se sufre en la región.

La ruptura del tejido social a causa de la violencia e inseguridad, la falta de confianza en las instituciones, la normalización de la violencia estatal, la retórica del miedo y la seguridad, aunado a las condiciones de pobreza, exclusión social, junto con la poca capacidad institucional para solucionar los problemas de la ciudadanía en países con democracias consideradas “en construcción” son el caldo de cultivo para que el desencanto con las instituciones democráticas lleve a las personas a apoyar medidas que amenacen los principios democráticos.

2. Análisis de victimización, percepción de la inseguridad y confianza en las instituciones democráticas en Centroamérica, y la República Dominicana de 2008 a 2021

La presente sección utiliza las bases de datos de las encuestas LAPOP lab (2008a – 2021f) para los años 2008, 2012, 2016/17 y 2021 para analizar tres variables: los niveles de victimización por delincuencia, la percepción de inseguridad, la confianza en las instituciones y el vínculo entre estas y el apoyo a la democracia en seis países de la región: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana. El análisis inicia con un análisis regional descriptivo de los indicadores antes mencionados, desagregados por país, por sexo, pertenencia a un grupo étnico o racializado y lugar de residencia, se analiza la tendencia del promedio de los seis países y se destacan aquellos países con una mayor incidencia o con una tendencia inversa a la región. Finalmente se

realiza un análisis, utilizando regresiones multivariadas, sobre la influencia de la percepción de inseguridad en el apoyo a la democracia en la región. Este análisis parte de la hipótesis que el apoyo a la democracia y a la confianza interpersonal guardan una relación con tres dimensiones: 1) la seguridad ciudadana; 2) las características socioeconómicas de los ciudadanos, como el lugar de residencia, el nivel educativo o la riqueza y 3) los aspectos políticos que capturan aspectos del entorno como la percepción que la economía es el principal problema del país, la percepción que su situación económica está mal, la evaluación del trabajo del presidente y para el caso del apoyo difuso al sistema se incluye la satisfacción con la democracia como variable explicativa en la dimensión política.

2.1 Fuentes de información

LAPOP lab es un centro de investigación internacional por encuestas, ubicado en la Universidad de Vanderbilt. LAPOP lab realiza las encuestas Barómetro de las Américas en 34 países de la región, esta se enfoca en una diversidad de temas entre los que destacan el apoyo a la democracia, la confianza en las elecciones, la percepción sobre la corrupción, la delincuencia y justicia y mide el nivel de victimización por delincuencia, la percepción de inseguridad y evaluaciones del sistema de justicia.

El cuadro 1 muestra el tamaño de las muestras y el error muestral asociado a dicho tamaño para los seis países del análisis. Se utilizan cuatro rondas de levantamiento, la primera de 2008, la segunda 2012, la tercera de 2016 para Costa Rica, El Salvador, Honduras y República Dominicana y 2017 para Guatemala y Panamá y finalmente la cuarta ronda de levantamiento para 2021 para los seis países. Para las primeras tres rondas las muestras oscilan alrededor de 1,500 participantes que permiten un nivel de error cercano al 2.5%, para la cuarta ronda el tamaño de muestra es mayor, pero este se divide en dos cuestionarios, por lo que para algunas preguntas la muestra efectiva alcanza los 1,500. Las encuestas son de corte transversal (es decir no tienen un diseño de panel) y el tamaño de las muestras permite realizar análisis a nivel nacional o regional, pero no desagregar por subregiones o departamento. Las muestras y errores muestrales para cada año y país se presentan en el cuadro 1:

Cuadro 1. Muestras y errores muestrales LAPOP lab

País	2008	2012	2016	2017	2021
Costa Rica	1,500 ±2.53	1,498 ±2.8	1,514 ±2.5	-	2,977 ±1.8
El Salvador	1,549 ±2.4	1,512 ±2.5	1,551 ±2.5	-	<u>3,245</u> ±1.8%
Guatemala	1,538 ±2.9	1,509 ±2.5	-	1,547 ±2.5	<u>3,000</u> ±1.8
Honduras	1,522 ±2.51	1,728 ±2.5	1,560 ±2.5	-	<u>2,999</u> ±1.8
Panamá	1,536 ±2.5	1,620 ±2.5	-	1,521 ±2.5	<u>3,183</u> ±1.8
República Dominicana	1,507 ±2.52	1,512 ±2.5	1,518 ±2.5	-	<u>3,000</u> ±1.8

Fuente: elaboración propia con base en información técnica LAPOP lab (2008a – 2021f).

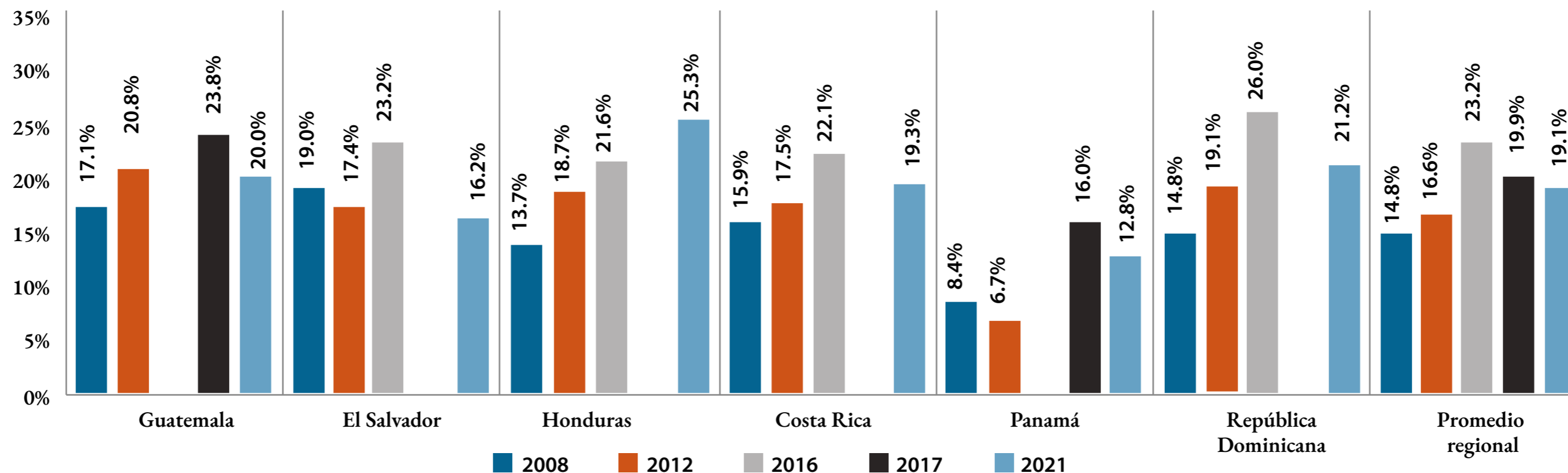
2.2 Evolución de la victimización por delincuencia

El primer aspecto que se explora es la evolución de la victimización por delincuencia en la región, para cada país y desagregada por sexo, pertenencia a un grupo étnico racial y lugar de residencia. Se entiende por victimización el porcentaje de personas que han sido víctimas de la delincuencia en general en los últimos doce meses⁸. La prevalencia de la delincuencia ha tendido al alza en la región, pasando de un promedio del 14.8% en 2008 al 19.1% en 2021. Al examinar cada país, Panamá es el país con menores niveles de victimización, con tasas de 8.4% para 2008 y un máximo del 12.8% en 2021, siete puntos porcen-

tuales por debajo de la media de los países estudiados. Por su parte, el país con mayores tasas de victimización a lo largo del periodo estudiado es Honduras, que, a pesar de que en 2008 tenía una tasa de victimización del 13.7% (un punto porcentual debajo del promedio de los países seleccionados, 14.8%), estas fueron aumentando paulatinamente hasta alcanzar el 25.3% en 2021, seis puntos porcentuales por encima del promedio de los países de la región. También es importante destacar que la victimización por delincuencia muestra estancamiento en Guatemala y disminución en El Salvador.

8 Se utiliza la pregunta: **VIC1EXT**. Ahora, cambiando el tema, ¿ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en los últimos 12 meses? Es decir, ¿ha sido usted víctima de un robo, hurto, agresión, fraude, chantaje, extorsión, amenazas o algún otro tipo de acto delincuencia en los últimos 12 meses?

Gráfico 2. Tasas de victimización por delincuencia, 2008-2021.

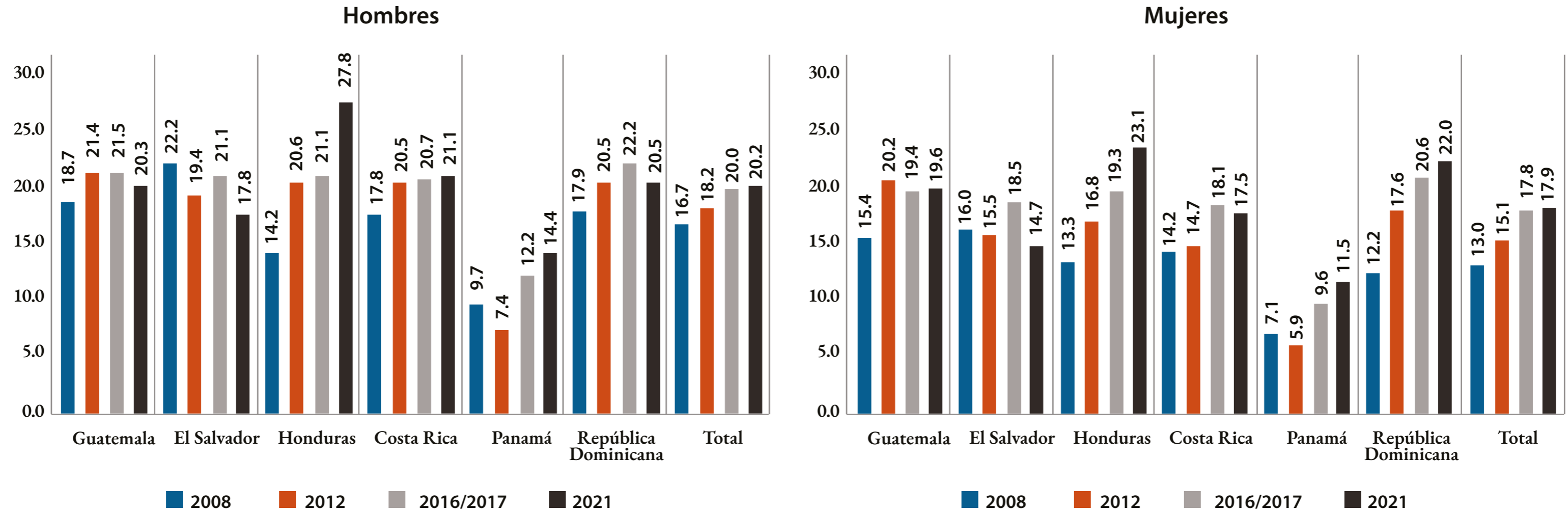


Fuente: elaboración propia con base en datos de LAPOP lab (2008a – 2021f).

Al desagregar por género la prevalencia de victimización por delincuencia, se observa que los hombres experimentan tasas de victimización más altas que las mujeres (ver gráfico 3). A nivel regional se ha encontrado que en promedio las tasas de victimización de los hombres es 3 puntos porcentuales superior al de las mujeres. Esta diferencia es mayor para Honduras, donde en 2021 la prevalencia de victimización de delincuencia alcanzó el 27.8% para los hombres, y del 23.1% para las mujeres. La prevalencia de la victimización por delito entre los hombres en Honduras

es la que más ha aumentado en la región alrededor de 13.6 puntos porcentuales al comparar 2021 con 2008. También destaca el caso de República Dominicana, donde, por el contrario, las tasas de victimización en las mujeres fueron más altas que las de los hombres en 2016. Aquí, es necesario tomar en cuenta que estas tasas de victimización por delincuencia no necesariamente toman en cuenta las tasas de violencia contra las mujeres en el ámbito privado ya que la pregunta de la encuesta se refiere exclusivamente a la delincuencia en el ámbito público.

Gráfico 3. Tasas de victimización por delincuencia, desagregada por sexo, 2008-2021.



Fuente: elaboración propia con base en datos de LAPOP lab (2008a – 2021f).

Otro factor importante que estudiar es el impacto que tiene la victimización por categoría étnico/racial, para conocer si las personas que se encuentran en grupos tradicionalmente desventajados experimentan tasas de delincuencia más elevadas. En ese sentido, las encuestas de LAPOP lab indagan la autodefinición de las personas con un grupo étnico o racial⁹, para propósitos de análisis, estos grupos se agrupan en dos categorías: aquellos históricamente marginados, como los indígenas y los afrodescendientes, y aquellos que se identifican como mestizos, blancos o ladinos en el caso de Guatemala.¹⁰ En general, se observa una mayor prevalencia de victimización por delincuencia en las personas indígenas y afrodescendientes, el promedio de la prevalencia fue del 19.7% en 2021 en contraste con la prevalencia de blancas o mestizas que fue del 18.9%. Las

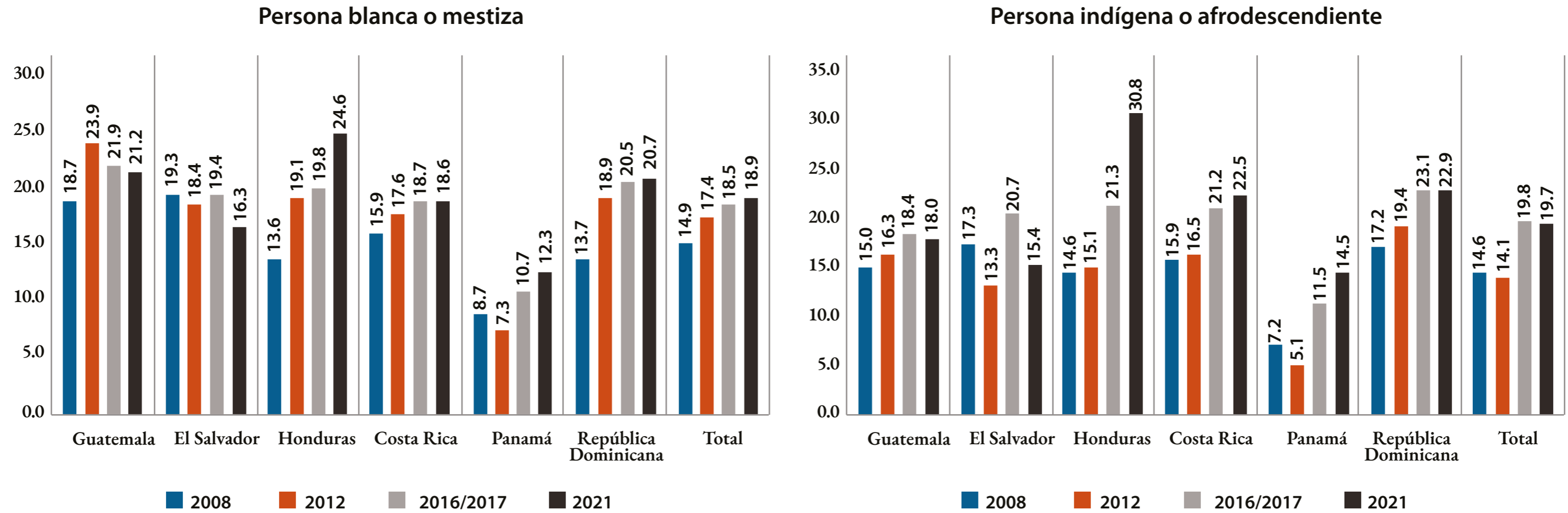
tasas de victimización para indígenas o afrodescendientes fueron menores en 2008 y 2012, sin embargo, de 2016 a 2021, las tasas de victimización superan a las de blancos o mestizas.

Al desagregar las tasas de victimización por país, para el año 2021, Costa Rica, Panamá, Honduras y República Dominicana tenían tasas de victimización más altas para las personas indígenas o afrodescendientes. En Honduras, este aumento es especialmente relevante con una diferencia de 6.2 puntos porcentuales. En todo el periodo estudiado, es necesario resaltar que las tasas de violencia para las personas indígenas o afrodescendientes fueron aumentando en todos los países a excepción de El Salvador.

9 La pregunta utilizada es ETID, la cual se adapta de manera diferente a cada país, para Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá se preguntó: “¿Usted se considera una persona blanca, mestiza, indígena, negra, mulata, u otra? [Si la persona entrevistada dice Afro-costarricense/Afro-salvadoreña/Afro-hondureña/Afro-panameña, codificar como (4) Negra]”; Para Guatemala: “¿Usted se considera una persona ladina, indígena u otra?”; y para República Dominicana “¿Usted se considera una persona blanca, mestiza (india), negra, mulata, u otra?”. Para Honduras la opción mestiza específica “Mestiza o trigueña” mientras que para Costa Rica, El Salvador y Panamá únicamente es “Mestiza”. Se entiende por tanto Afrodescendiente a las personas que se identifican como negra o mulata e indígena a los que se consideraron como tal.

10 En promedio, el 20.8% de la muestra se identifica como indígena o afrodescendiente, esta proporción para 2021 fue del 35.4% para los que autodefinen como indígena en Guatemala, del 22.8% para Panamá (7.1% indígena, 10.2% negro y 5.5% mulato) y del 23.7% para República Dominicana (11.2% negro y 12.5% mulato), 16.4% para Costa Rica (2.2% indígena, 1.6% negro y 12.6% mulato), 10.3% para Honduras (4.2% indígena, 2.4% negro y 3.7% mulato) y 8.2% para El Salvador (3.6% indígena, 2.4% negro y 2.2% mulato).

Gráfico 4. Tasas de victimización por delincuencia, desagregada para personas indígenas, afrodescendientes, mestizas o blancas, 2008-2021

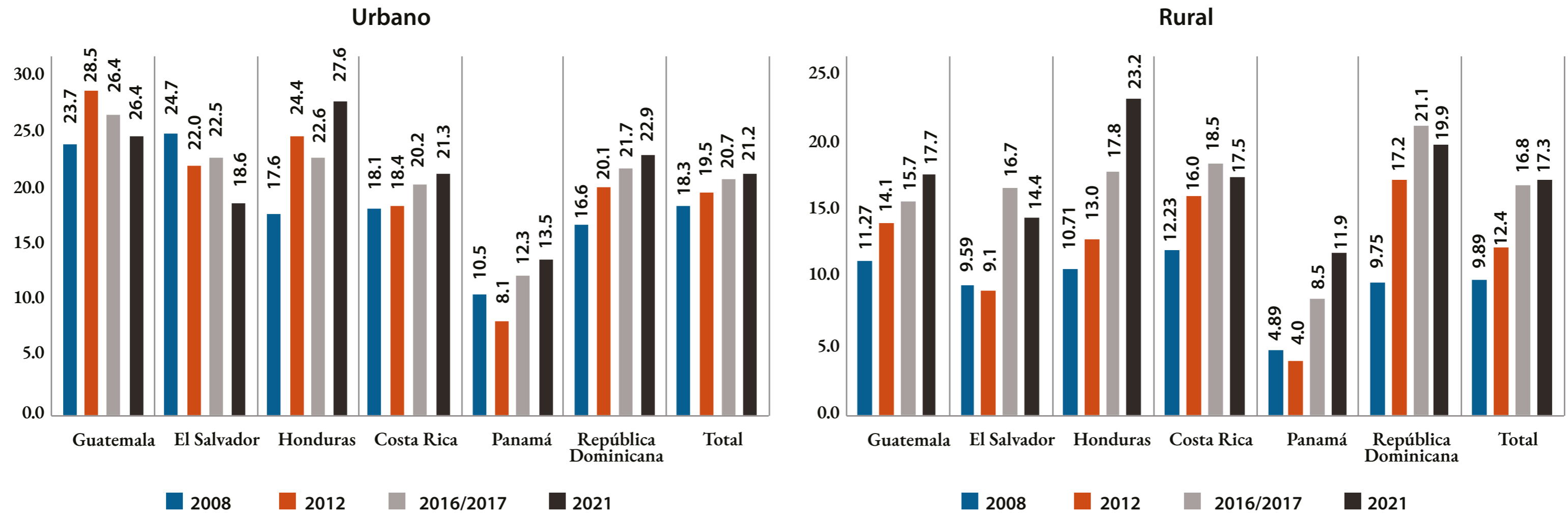


Fuente: elaboración propia con base en datos de LAPOP lab (2008a – 2021f).

La prevalencia de la victimización por delincuencia es mayor en las áreas urbanas, sin embargo, las áreas rurales han experimentado un alza en la delincuencia en los últimos años. En las áreas urbanas, las tasas de victimización eran al menos 4 puntos porcentuales más altas que en el área rural en toda la región, aunque esta brecha se ha ido reduciendo, pasando de 8.4 puntos porcentuales en 2016, a 3.9 en 2021, reflejando un aumento sostenido de la delincuencia en las áreas rurales de la región. Un claro ejemplo de esto es el caso de Honduras, donde las tasas de la violencia en el área rural aumentaron 12.5 puntos porcen-

tuales durante el periodo estudiado, mientras que en el área urbana aumentaron en 10.1 puntos porcentuales. Otro caso de interés es el de Guatemala, donde la prevalencia de victimización por delito en el área urbana ha ido disminuyendo desde 2012, pasando de una tasa de victimización de 28.5% a una de 24.2% en 2021, mientras que en el área rural esta pasa de 11.3 % en 2008 a 17.3% en 2021. En el caso de El Salvador, la tendencia del área urbana es similar a la de Guatemala, sin embargo, en el área rural hubo un aumento de 7.6 puntos porcentuales en la victimización de 2012 a 2016.

Gráfico 5. Tasas de victimización por delincuencia, desagregada por área de residencia, 2008-2021



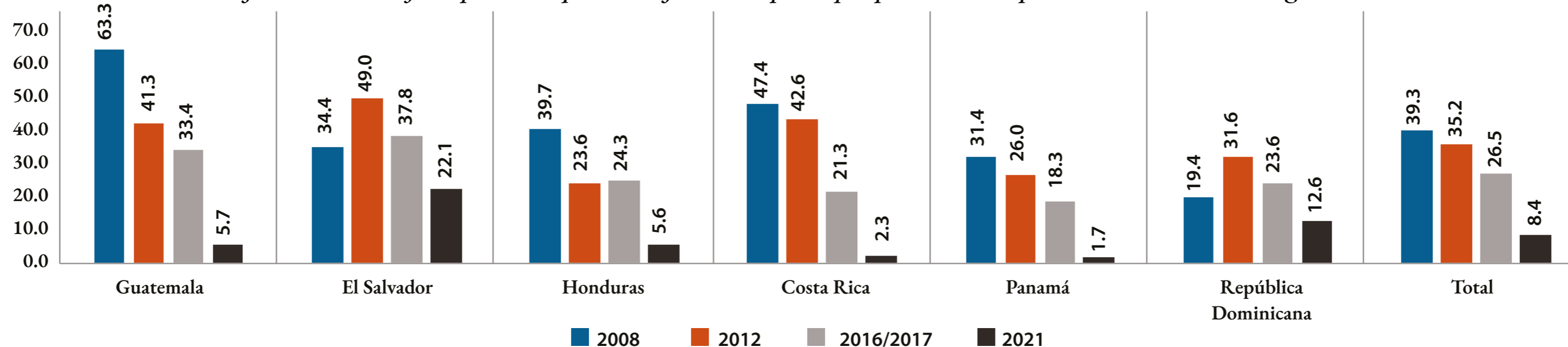
Fuente: elaboración propia con base en datos de LAPOP lab (2008a – 2021f).

2.3 Percepción de inseguridad

Otro indicador clave a analizar es la percepción que tiene la sociedad sobre la inseguridad que existe en su país. Una primera forma de acercarnos a la percepción es a través de la pregunta de cuál es el principal problema de su país¹¹, la pregunta es de tipo abierta y se clasifican como problemas de seguridad los problemas de crimen, delincuencia, consumo de drogas, narcotráfico, pandillas, falta de seguridad, secuestro,

desplazamiento forzado, violencia, violencia contra las mujeres entre otros. En promedio, en los países seleccionados la seguridad como principal problema ha tendido a la baja, pasando en promedio del 39% de personas que pensaban que el principal problema de su país estaba relacionado con la seguridad en 2008 a un 8.4% en 2021. En 2021 los principales problemas estaban relacionados a la economía y al Covid-19.

Gráfico 6. Porcentaje de personas que identificaron el principal problema del país relacionado con la seguridad.



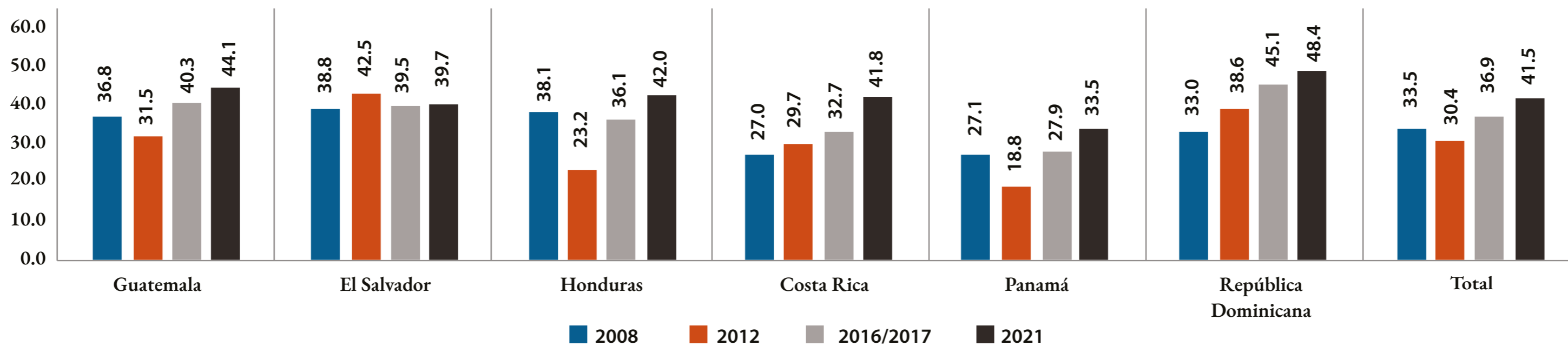
Fuente: elaboración propia con base en datos de LAPOP lab (2008a – 2021f).

11 **Pregunta A4.** En su opinión ¿cuál es el problema más grave que está enfrentando el país?

El país donde hay una caída más grande es Guatemala donde cae de un 63.3% en 2008 a un 5.7% en 2021, siendo esto un cambio drástico en la percepción del principal problema del país. Asimismo, en los casos de países como Honduras, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, a pesar de que la victimización ha ido aumentando a lo largo de los años, en estos años no se considera que la seguridad sea el principal problema.

Otro indicador que permite explorar la percepción es el basado en la pregunta si las personas se sienten seguras o inseguras en su barrio o zona de residencia¹², con ello se construyó el gráfico 7 presentando el porcentaje de personas que consideran su entorno como inseguro o muy inseguro. Este indicador si refleja un aumento en la percepción de inseguridad en la región, que en promedio pasa del 33.5% en 2008 al 41.5% en 2021.

Gráfico 7. Porcentaje de personas que consideran que viven en un barrio inseguro o muy inseguro.



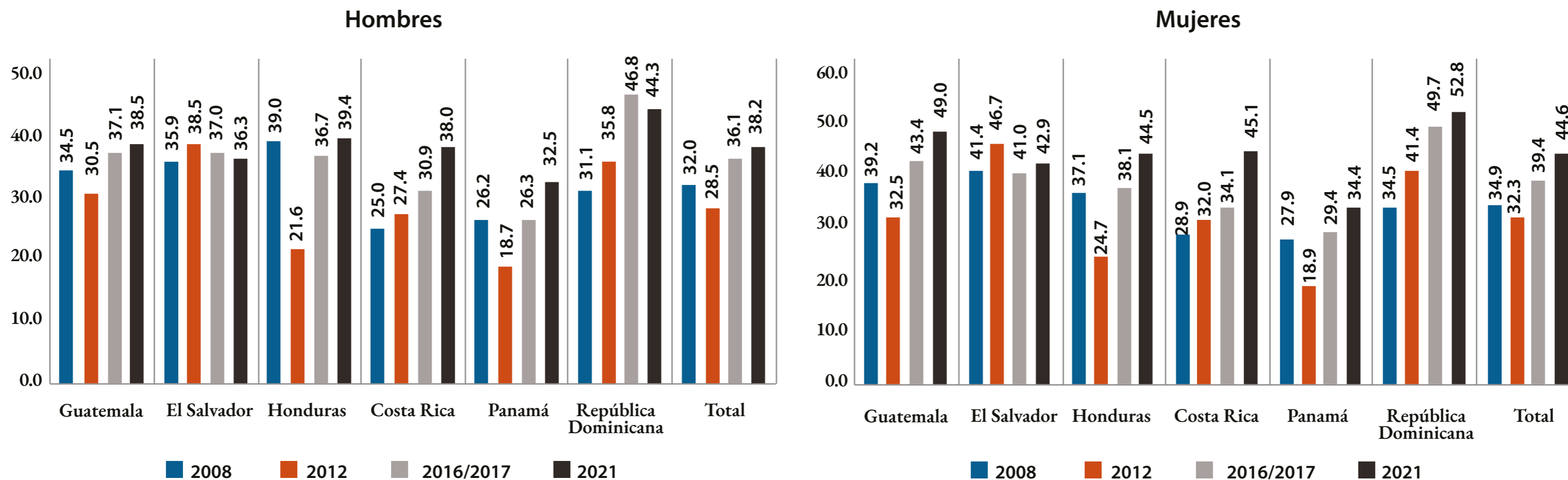
Fuente: elaboración propia con base en datos de LAPOP lab (2008a – 2021f).

12 **AOJ11.** Hablando del lugar o el barrio donde usted vive y pensando en la posibilidad de ser víctima de un asalto o robo, ¿usted se siente muy seguro(a), algo seguro(a), algo inseguro(a) o muy inseguro(a)?

La percepción de inseguridad en el barrio es distinta para hombres y mujeres (ver gráfico 8), en general, las mujeres perciben a su entorno como más inseguro que en el caso de los hombres, estas diferencias se han ido asentando con el paso del tiempo. El año 2021 en el que más diferencia hay entre la percepción de

inseguridad entre hombres y mujeres, pasando de un 34.9% de las mujeres y un 32.0% de los hombres en 2008, a un 44.6% para las mujeres y un 38.2% para los hombres en 2021. Debe notarse que esta percepción tiene un comportamiento inverso al de las tasas de victimización que presentan hombres y mujeres.

Gráfico 8. Porcentaje de personas que consideran que viven en un barrio inseguro, por sexo, 2008-2021

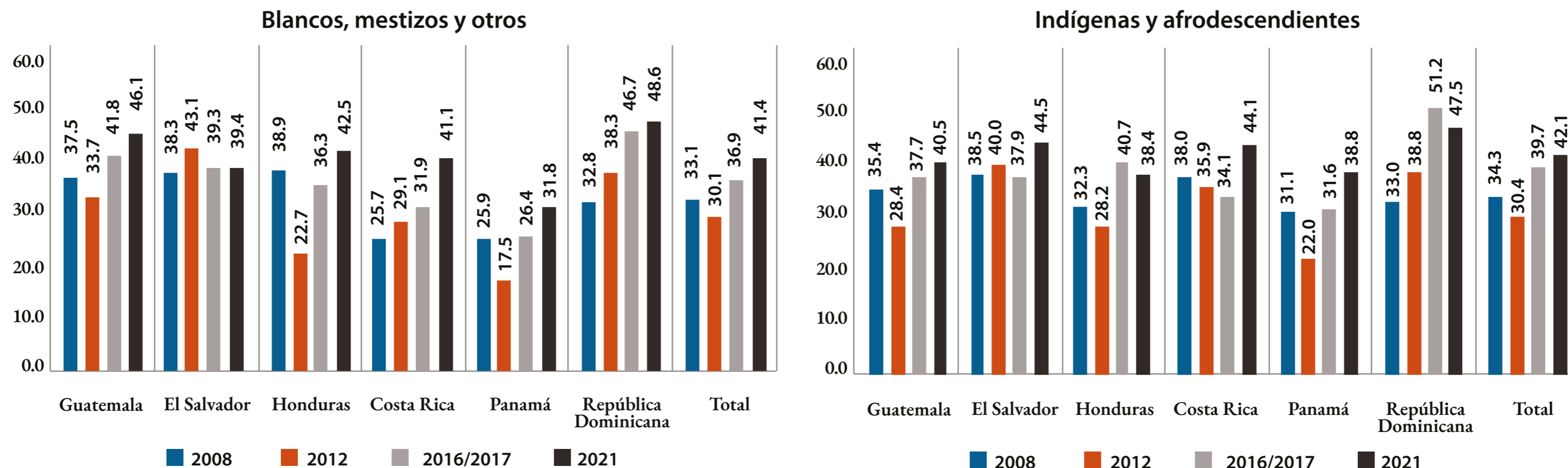


Fuente: elaboración propia con base en datos de LAPOP lab (2008a – 2021f).

La proporción de indígenas y afrodescendientes que perciben a su barrio como inseguro o muy inseguro similar a la de mestizos o blancos (ver gráfico 9); a nivel regional no se encuentran diferencias muy altas entre las percepciones de ambos grupos. No obstante se destaca que, para República Dominicana en 2016, y Guatemala en 2021 se registran diferencias más altas

entre ambos grupos con 4.5 puntos porcentuales y 5.5 puntos porcentuales de diferencia, respectivamente. Esto es importante para estudiar en el contexto de las dinámicas raciales en los países donde estas tasas son más altas, al mismo tiempo encontrar las características de los patrones de inseguridad los años de mayor divergencia.

Gráfico 9. Percepción de inseguridad del barrio de residencia, desagregada para indígenas, afrodescendientes, mestizos o blancos, 2008-2021

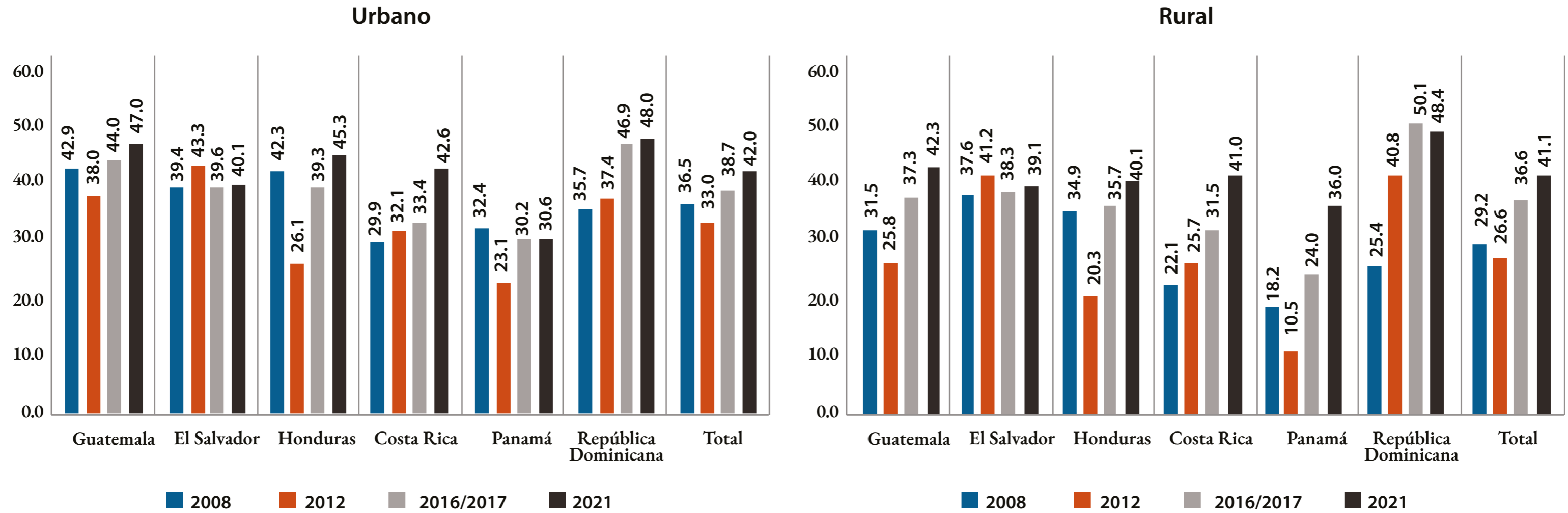


Fuente: elaboración propia con base en datos de LAPOP lab (2008 a – 2021f).

En el caso de percepción de inseguridad del barrio por área de residencia (ver gráfico 10), en general, las personas que viven en el área urbana tienen percepciones más altas de la inseguridad en sus comunidades, esto se corresponde con las mayores tasas de victimización en dichas áreas, con una diferencia que se ha ido cerrando a lo largo de los años. Así, para 2008, las personas que residían en el área rural reportaron sentirse inseguras o muy inseguras fue del 29.2% contra un 36.5% que era reportado en el área urbana, mientras que, en 2021, la tasa de percepción de inseguridad fue de 41.1% para el área rural y de 42% para

el área urbana. También debe notarse que en todos los países el área rural ha presentado un mayor aumento en la percepción de inseguridad sobre el área urbana. A nivel de país se puede observar que las brechas más altas de percepción de la inseguridad entre el área urbana y el área rural para 2021, se encontraron en Honduras, donde la percepción de la inseguridad en el área urbana era de 5 puntos porcentuales más altos en el área urbana, y Panamá, donde el área rural percibe más inseguridad en 6 puntos porcentuales que el área urbana, diferenciándose de la tendencia de la región.

Gráfico 10. Personas que consideran que viven en un barrio inseguro, por área de residencia, 2008-2021



Fuente: elaboración propia con base en datos de LAPOP lab (2008a – 2017f).

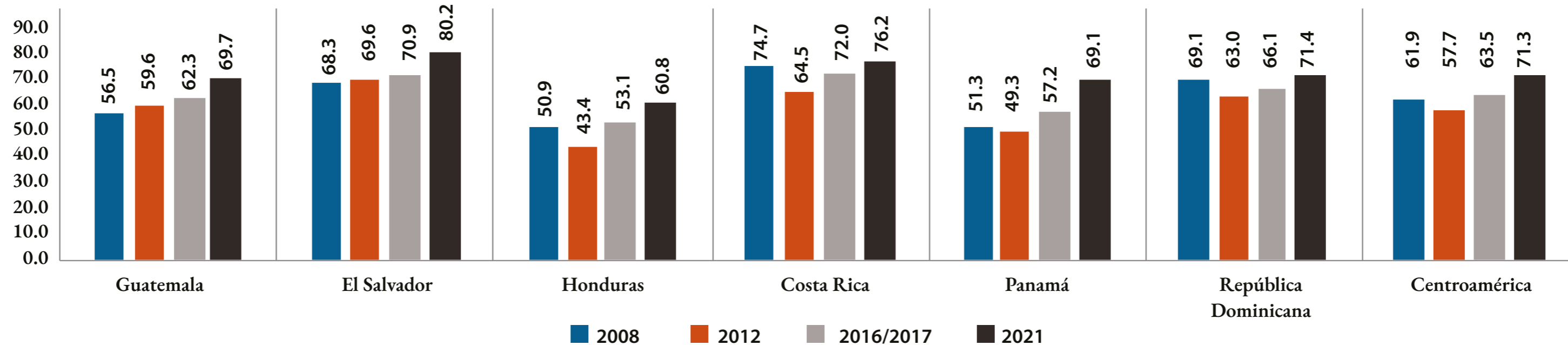
2.4 Confianza en las instituciones

Esta sección analiza la evolución de la confianza ciudadana en las principales instituciones democráticas, ello fue realizado con base en las preguntas de la sección B de los cuestionarios de las encuestas del Barómetro de las Américas, referidas a la confianza a las distintas instituciones democráticas de los países de Centroamérica y República Dominicana, esto se complementa con las actitudes frente a la democracia, para conocer la confianza en las instituciones y hacia

el régimen democrático por parte de los ciudadanos de la región. En primer lugar, se estudia el nivel de respeto que las personas sienten por las instituciones políticas de su país¹³ (ver gráfico 11). El indicador de respeto por las instituciones políticas ha aumentado en los últimos años, pasando de 61.9 a 71.3 en promedio para la región, es decir que, durante los 15 años estudiados el respeto por las instituciones de gobierno de sus países ha aumentado de manera sostenida.

13 **B2.** ¿Hasta qué punto tiene usted respeto por las instituciones políticas de [PAÍS]? utilizando un número de una escala que va de 1 a 7, donde 1 es nada y 7 es mucho. Esta se convierte a un índice de 0 a 100, donde 0 es nada y 100 es mucho.

Gráfico 11. Indicador de respeto por las instituciones políticas del país.



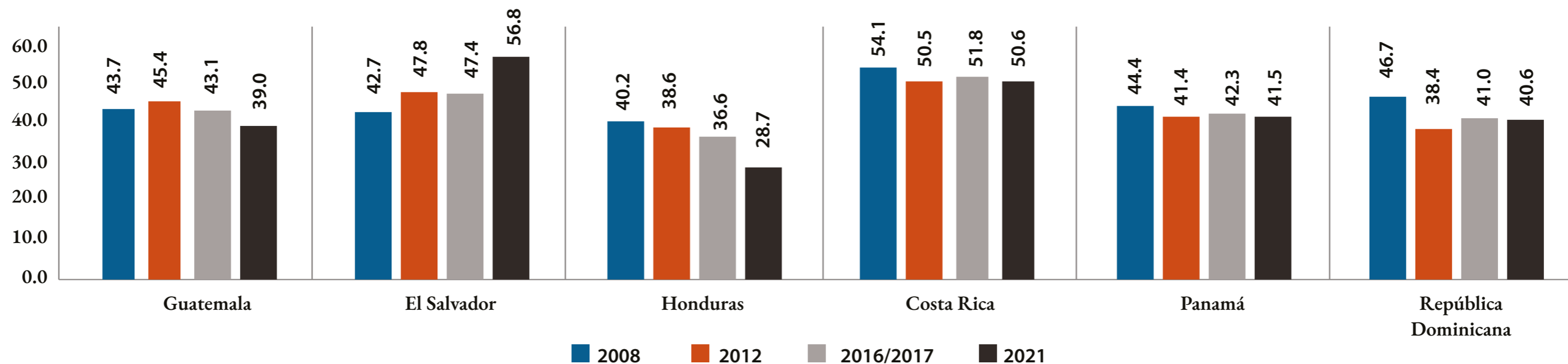
Fuente: elaboración propia con base en datos de LAPOP lab (2008a – 2021f).

Sin embargo, cuando se pregunta a las personas si consideran que sus derechos están protegidos¹⁴ (ver gráfico 12), en tres países (Costa Rica, República Dominicana y Guatemala) se observa una caída en la percepción de la protección de derechos, y un alza en El Salvador que de 2008 a 2021 tiene un aumento de 14.1 puntos porcentuales, este aumento en El Salvador puede estar influenciado por la opinión positiva del presidente y sus políticas públicas. Esta percepción se profundiza en FUNDAUNGO (2022), que encontró que el 41.8% de los y las salvadoreñas sabían poco de Derechos Humanos, y un 16.8% consideraron que no sabían nada del tema, lo

cual deja preguntas abiertas sobre qué es lo que las personas consideran como que sus derechos humanos estén protegidos. Un análisis similar se puede hacer sobre los países en los que se observa una caída abrupta de la percepción de los derechos de las personas, como en el caso de Costa Rica, con una caída de 7.6 puntos porcentuales de 2008 a 2012 y República Dominicana con una caída de 9 puntos porcentuales en el mismo periodo, debe tomarse en cuenta que en estos países también se mostraron aumentos sostenidos en la victimización de las personas así como en su percepción de la inseguridad, por lo que es necesario explorar las correlaciones entre estos datos.

14 **B3.** ¿Hasta qué punto cree usted que los derechos básicos del ciudadano están bien protegidos por el sistema político costarricense/salvadoreño/guatemalteco/hondureño/panameño/dominicano?

Gráfico 12. Porcentaje de personas que consideran que sus derechos están protegidos



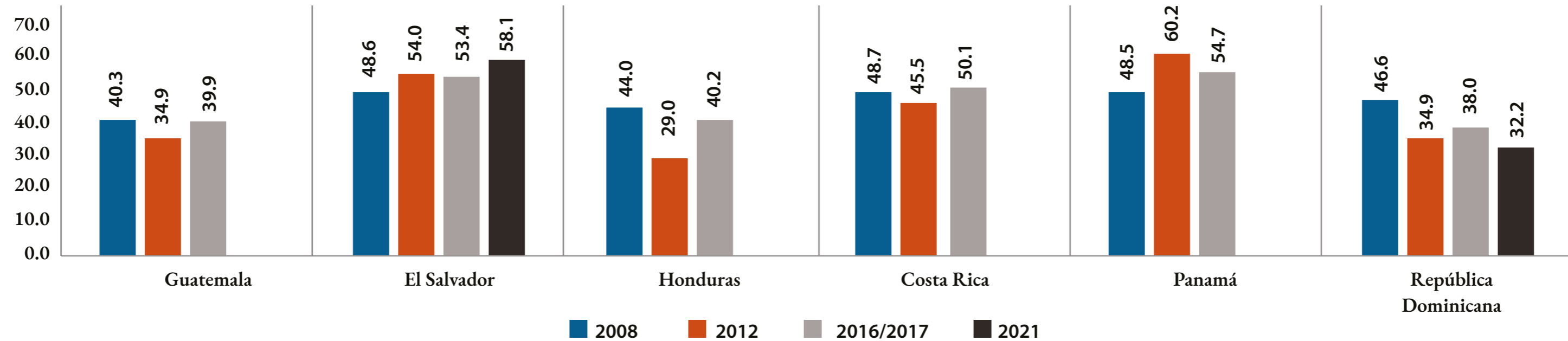
Fuente: elaboración propia con base en datos de LAPOP lab (2008a – 2021f).

Para estudiar el nivel de confianza que las personas sentían por determinadas instituciones políticas, como por ejemplo, la policía, se creó un indicador de 0 a 100 promediando los puntajes de las respuestas sobre la confianza que las personas sienten por la Policía¹⁵ (ver gráfico 13), donde 0 indica que no tienen confianza en la policía y 100 que hay una completa confianza, y no existe una tendencia regional

clara de la confianza en la policía. En El Salvador, la confianza en la policía tiene un crecimiento acelerado, con un aumento de 9.5 puntos porcentuales entre 2008 y 2021. Mientras que, en Guatemala, Costa Rica y Honduras la confianza en la policía cae marcadamente en 2012, pero se recupera en 2016. Y en República Dominicana la confianza en la policía se reduce en 14.4 puntos entre 2008 y 2021.

15 **B18.** ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Policía? de una escala que va de 1 a 7, en la que 1 significa NADA y 7 significa MUCHO.

Gráfico 13. Indicador de confianza en la policía



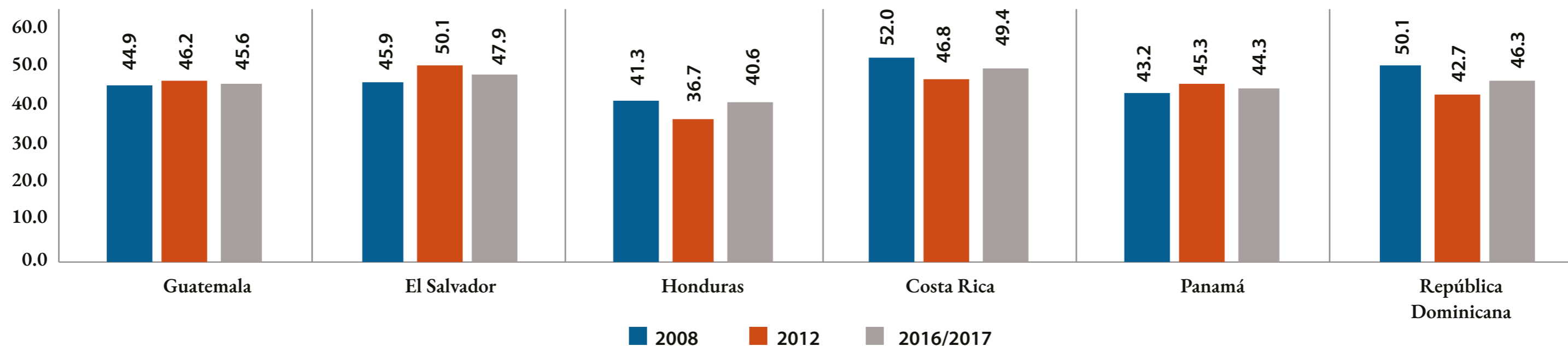
Fuente: elaboración propia con base en datos de LAPOP lab (2008a – 2021f).

Tampoco existe un patrón regional respecto a la confianza en el sistema de justicia¹⁶ (ver gráfico 14), hay una reducción de la confianza en Costa Rica y República Dominicana (2.6 y 3.8 respectivamente al comparar 2008 y 2016/17), para El Salvador y Panamá esta tendencia es inversa, con un aumento significativo en la confianza al sistema judicial en 2012 que se pierde en 2016 y 2017. Es

interesante que comparando el comportamiento de la confianza en el sistema judicial con la percepción de que los derechos de las personas están protegidos (ver gráfico 12), se puede notar comportamientos similares a excepción de Honduras, donde la confianza en el sistema judicial es mayor a la creencia que los derechos están protegidos.

16 **DOMB1.** ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en el sistema de justicia costarricense/salvadoreño/guatemalteco/hondureño/panameño/dominicano? [Si es necesario, repetir: “Usando cualquier número de la escala de 1, ‘nada’ a 7, ‘mucho’”]

Gráfico 14. Indicador de confianza en el sistema judicial



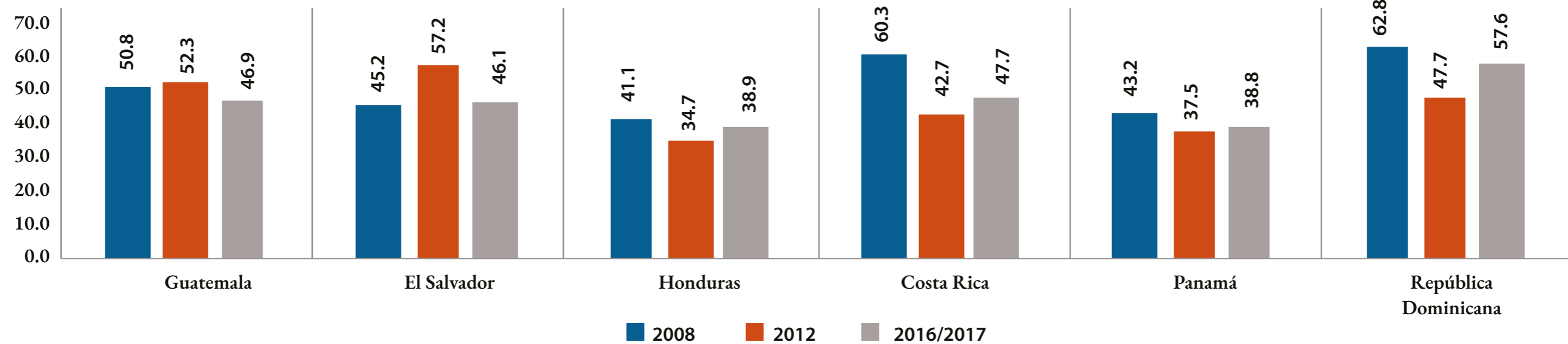
Fuente: elaboración propia con base en datos de LAPOP lab (2008a – 2017b).

Por su parte, la confianza en los presidentes¹⁷ (ver gráfico 15) se midió únicamente para los años 2008, 2012, 2016 y 2017, y los cambios en el indicador reflejan al menos tres períodos de gobierno por país. Los países con menor confianza en su presidente fueron Panamá (Torrijos, 2008; Martinelli, 2012 y Varela, 2017) y Honduras (Michelleti, 2008; Lobo, 2012 y Orlando 2016), seguidos por El Salvador (Saca 2008; Funes, 2012 y Cerén, 2016), Guatemala (Colom, 2008; Pérez

2012; Morales, 2017) y Costa Rica (Arias, 2008; Chinchilla, 2012 y Solís, 2016), el país con mayor confianza en sus presidentes fue República Dominicana (Fernández, 2008 y 2012 y Medina, 2017). Debe notarse que en Honduras, Costa Rica y República Dominicana la confianza en el presidente tiene tendencias similares a la confianza en el sistema democrático (ver gráfico 11), mientras que, en El Salvador, la confianza en el presidente no se refleja en la confianza en el sistema democrático

17 **B21A.** ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en el presidente?... en la cual 1 es la grada más baja y significa NADA y el 7 es la grada más alta y significa MUCHO.

Gráfico 15. Indicador de confianza en el presidente



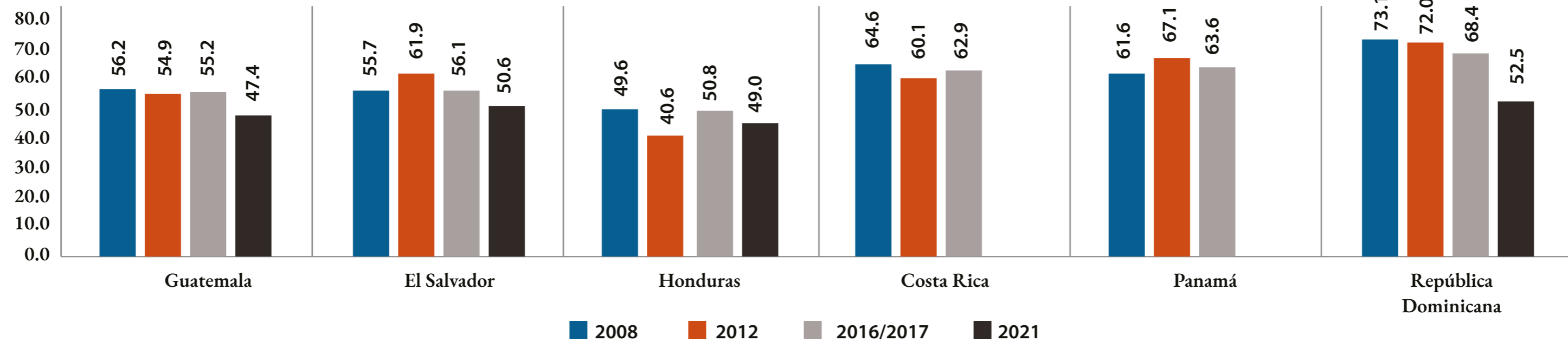
Fuente: elaboración propia con base en datos de LAPOP lab (2008a – 2017b).

Por otro lado, cuando se habla de la confianza en los medios de comunicación¹⁸ (ver gráfico 16) que tienen una alta importancia sobre la opinión pública, en toda Centroamérica, se observa una caída en la confianza hacia estos, solamente Panamá tiene una tasa más alta en el último periodo en el que hay

datos disponibles (2016 y 2017) pasando de un índice de confianza de 61.6 a un 63.6. El país que tiene una caída más fuerte en esta confianza es República Dominicana quien pasó de un índice de confianza de 73.1 en 2008 contra un 52.5 en 2021.

18 B37. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en los medios de comunicación?

Gráfico 16. Porcentaje de personas que expresan confianza por los medios de comunicación.



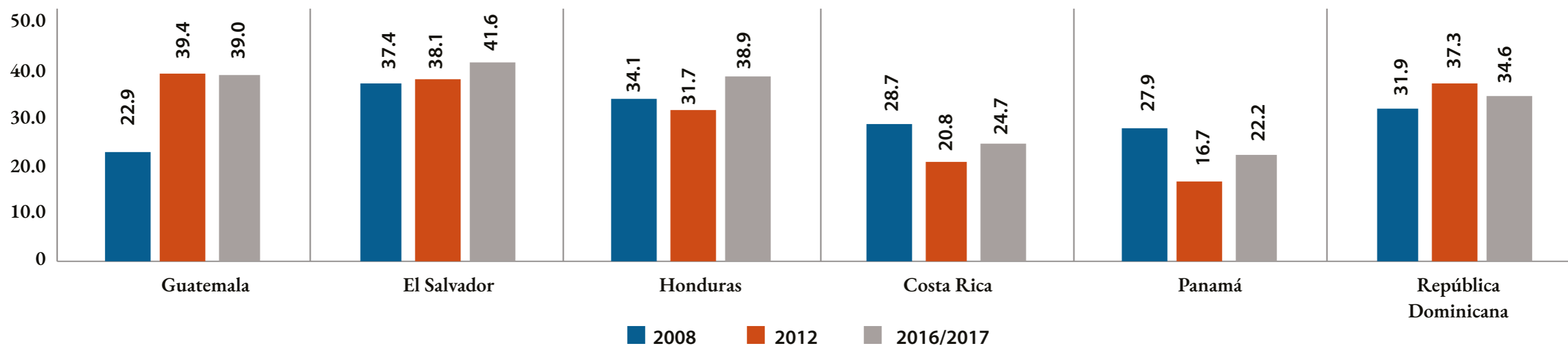
Fuente: elaboración propia con base en datos de LAPOP lab (2008a – 2021f).

Otra medida para conocer la confianza que las personas tienen en el sistema de justicia de sus países es consultarles hasta que grado aprueban el uso de la justicia por cuenta propia¹⁹ (ver gráfico 17). Para Guatemala, El Salvador y Honduras el valor del indicador aumenta con el paso del tiempo, sin embargo, esto no queda tan relacionado con los aumentos en las tasas de victimización, como es el caso de El Salvador, donde a pesar de que las tasas de violencia han bajado, la aprobación

de la justicia por mano propia va en aumento. Para Panamá y Costa Rica, a pesar de que las tasas de victimización están en aumento, la aprobación de la justicia por mano propia disminuye. Debe notarse que en el caso de Honduras es donde ha habido un aumento más grande de un periodo a otro en tanto esta aprobación de la justicia por mano propia ha aumentado en 8 puntos porcentuales del 2012 al 2016, reflejando el desgaste de la confianza en las instituciones de justicia.

¹⁹ **E16.** Que las personas hagan justicia por su propia cuenta cuando el Estado no castiga a los criminales. ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba? ... tiene una escalera del 1 a 10, el 1 indica que usted desaprueba firmemente y el 10 indica que usted aprueba firmemente. Las respuestas se escalan donde 0 indica que desaprueba y 100 que aprueba firmemente.

Gráfico 17. Porcentaje de personas que apoyan el uso de la justicia por mano propia



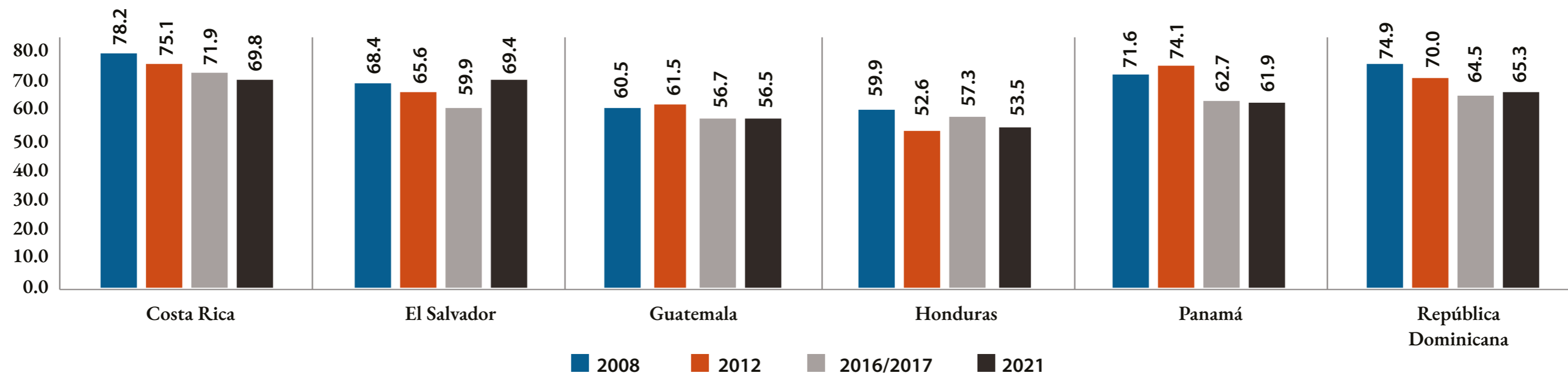
Fuente: elaboración propia con base en datos de LAPOP lab (2008a – 2017b).

Para medir el apoyo a la democracia se utiliza la pregunta “Puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase?”²⁰, el apoyo a esta afirmación se ha reducido en promedio, de 69 a 62, para los seis países en análisis. La mayor disminución se da en los países que en 2008 reportaban mayor apoyo a la democracia: Panamá (disminuye 9.7 puntos), República Dominicana

(disminuye 9.6) y Costa Rica (disminuye 8.4). Pero también disminuye en los países que reportaban menor apoyo: Honduras (disminuye 6.4) y Guatemala (disminuye en 4.0). El apoyo a la democracia en El Salvador tiene un comportamiento diferente, disminuye 8.4 puntos entre 2008 y 2016, pero este aumenta significativamente en 2021, reflejando un aumento del apoyo a la democracia de 1.1 al comparar el puntaje de 2021 respecto a 2008.

20 **ING4.** Puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase? Esta pregunta se responde en una escala de 0 a 7 que se recodifica en un índice de 0 a 100, donde 0 representa muy en desacuerdo y 100 muy de acuerdo.

Gráfico 18. Evolución del índice de apoyo a la democracia, 2008 - 2021



Fuente: elaboración propia con base en datos de LAPOP lab (2008a – 2021f).

El segundo aspecto a analizar es el apoyo al sistema democrático, que mide el nivel de apoyo de los ciudadanos a su sistema de gobierno, sin enfocarse en un gobierno específico. Córdova (2011) indica que en la literatura de la ciencia

política a este fenómeno se le llama “apoyo difuso”. Para esto se construye un índice a partir de cuatro²¹ preguntas que evalúan: i) el respeto a las instituciones políticas²², ii) la confianza ciudadana en que los derechos básicos están bien

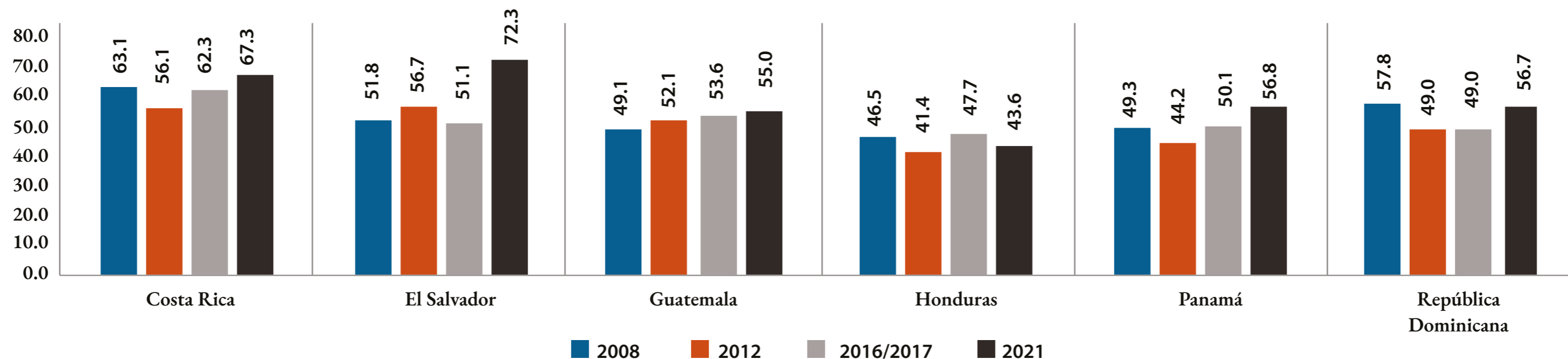
21 Córdova (2011) utiliza cinco preguntas para el cálculo del Índice de apoyo al sistema democrático, pero la ronda 2021 excluyó la pregunta sobre la confianza en que los tribunales de justicia garanticen un juicio justo, por lo que el Índice se constituye únicamente de cuatro preguntas.

22 Medido por la pregunta: B2. ¿Hasta qué punto tiene usted respeto por las instituciones políticas de... [País]?

protegidos²³, iii) el orgullo que sienten los ciudadanos por el sistema político de su país²⁴ y iv) si creen que este debe ser apoyado²⁵. Estas preguntas se combinan en un índice que toma el valor de cero cuando la respuesta es nada y 100 cuando la respuesta es mucho. El valor promedio del índice para la región es de 53.4.

Los ciudadanos costarricenses son los que mayor apoyo al sistema democrático expresan, los guatemaltecos, hondureños y panameños los que menos apoyo expresan, y resalta nuevamente el cambio en el apoyo de los salvadoreños cuyo índice pasa de 51.8 en 2008 a 72.3 en 2021.

Gráfico 19. Evolución del índice de apoyo al sistema democrático, 2008 - 2021



Fuente: elaboración propia con base en datos de LAPOP lab (2008a – 2021f).

23 **B3.** ¿Hasta qué punto cree usted que los derechos básicos del ciudadano están bien protegidos por el sistema político ... [País]?

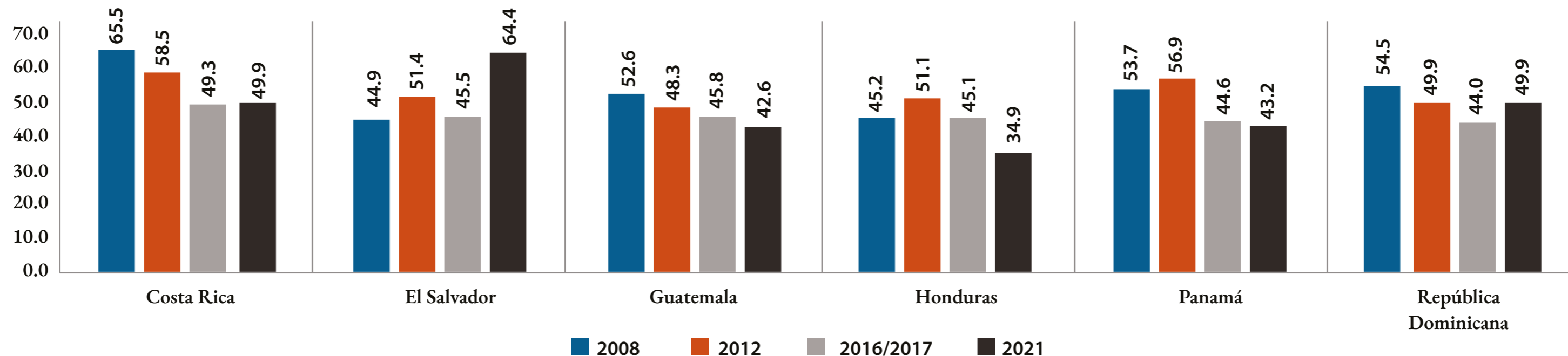
24 **B4.** Siempre usando la escala de 1, “nada” a 7, “mucho” ... ¿Hasta qué punto se siente usted orgulloso de vivir bajo el sistema político ... [País]?

25 **B6.** ¿Hasta qué punto piensa usted que se debe apoyar al sistema político... [País]?

El tercer aspecto del apoyo a la democracia que se analiza es la satisfacción ciudadana con el funcionamiento de la misma. Para esto se pregunta qué tan satisfecho está con la forma en que la democracia funciona en su país²⁶, la respuestas se convierten en un índice de 0 a 100, donde 0 indica que la personas está muy insatisfecha y 100 que está muy satisfecha, el puntaje promedio de la región es de 49.7. Sin embargo, la satisfacción con la demo-

cracia ha disminuido para la mayoría de los países si se compara 2008 con 2021, la mayor disminución es de Costa Rica que pasa de un puntaje de 65.5 a 49.9, seguido por la disminución en la satisfacción en Panamá, Honduras y Guatemala y en menor medida en la República Dominicana. Nuevamente El Salvador presenta una tendencia contraria al aumentar el índice de 44.9 en 2008 a 64.4 en 2021.

Gráfico 20. Evolución del índice de satisfacción con el funcionamiento de la democracia, 2008 - 2021



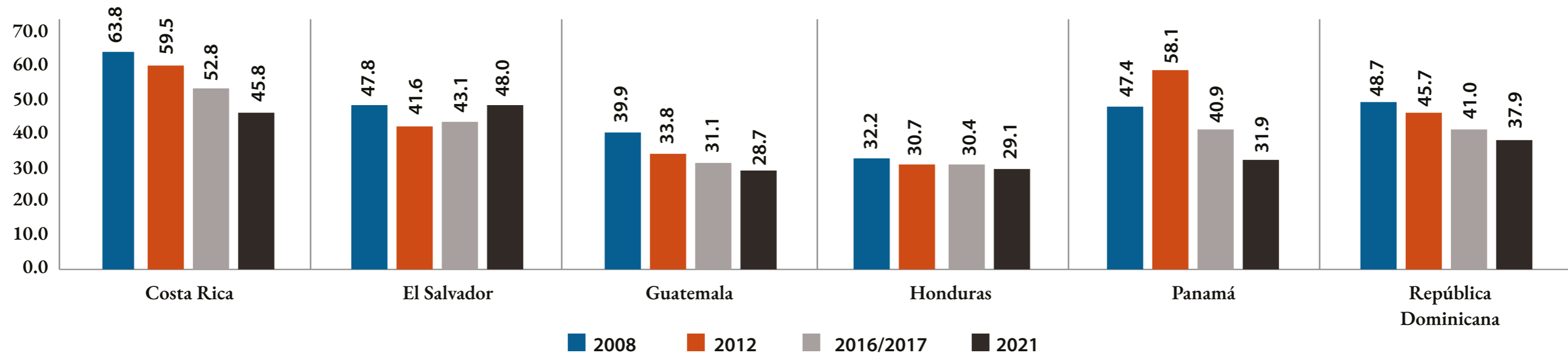
Fuente: elaboración propia con base en datos de LAPOP lab (2008a – 2021f).

26 **PN4.** En general, ¿usted diría que está muy satisfecho(a), satisfecho(a), insatisfecho(a) o muy insatisfecho(a) con la forma en que la democracia funciona en [País]?

Tendencias similares a las de la satisfacción con la democracia se encuentran cuando se les pregunta a las personas si consideran que la democracia es la mejor forma de gobierno (ver gráfico 19), aquí se puede ver que, durante el

periodo estudiado, para el total de países se ha dado una caída del 10.8 puntos porcentuales, lo cual indica que las personas de la región están prefiriendo gobiernos de corte autoritario.

Gráfico 21. Porcentaje de personas que consideran que la democracia es la mejor forma de gobierno.

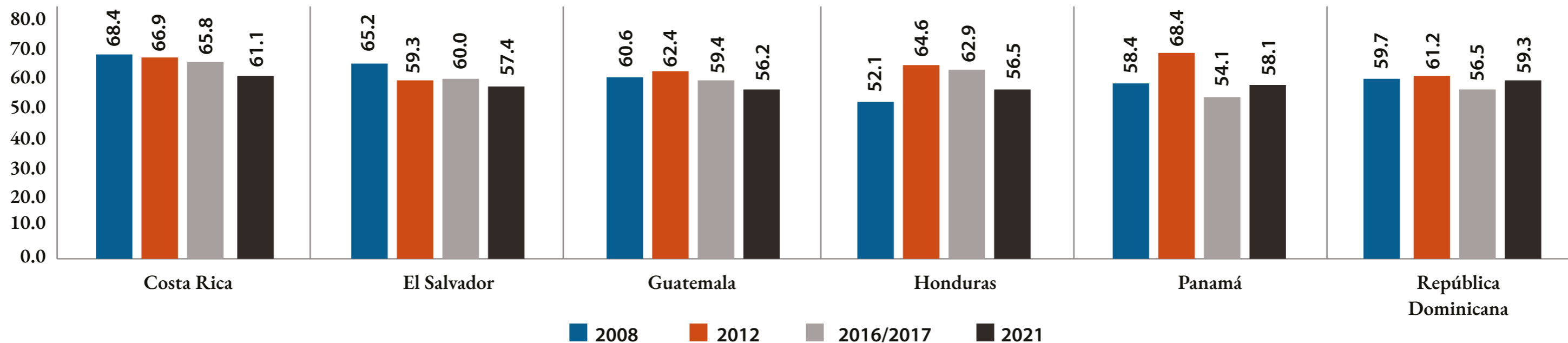


Fuente: elaboración propia con base en datos de LAPOP lab (2008a – 2021f).

El cuarto aspecto a analizar es la confianza interpersonal, esta se analiza ya que es más probable que persista la democracia en sociedades con mayor capital social. Para medir este aspecto se utiliza la pregunta el nivel de confianza que tienen las personas en la gente de su comunidad²⁷, cuya respuesta se convierte nuevamente en una escala de 0 a 100 donde 0 es nada confiable y 100 muy con-

fiable. El valor promedio del índice para la región ha disminuido de 60.7 a 58.1, la mayor disminución se presenta en El Salvador (7.8), seguido de Costa Rica (7.3) y en menor medida por el resto de los países, esto se incluye para conocer cómo afectan los entornos de violencia en la confianza que tienen las personas de su comunidad.

Gráfico 22. Evolución del índice de apoyo al sistema democrático, 2008 - 2021



Fuente: elaboración propia con base en datos de LAPOP lab (2008a – 2021f).

27 **IT1.** Y hablando de la gente de su comunidad, ¿diría usted que la gente de su comunidad es muy confiable, algo confiable, poco confiable, o nada confiable?”.

2.5 Determinantes del apoyo a la democracia y la percepción de inseguridad

Este estudio retoma los hallazgos de Córdova (2011) y explora los vínculos entre actitudes ciudadanas y democracia, específicamente el vínculo entre la violencia y la inseguridad en la erosión de la confianza institucional, así como los valores y actitudes hacia la democracia. En sintonía con Córdova (2011) se analizan cuatro aspectos relevantes para el funcionamiento de una democracia: el apoyo a la democracia, el apoyo al sistema democrático, la satisfacción con el funcionamiento de la democracia y la confianza interpersonal a partir de los resultados de LAPOP 2021²⁸.

El cuadro 2 presenta el resultado de las cuatro regresiones realizadas para los seis países de la región en 2021²⁹. Es necesario destacar que la ronda 2021 de LAPOP se realizó telefónicamente y dividió aleatoriamente la muestra en

dos cuestionarios: el cuestionario “*Core A*” y el cuestionario “*Core B*”, dividir la muestra de esta manera limita las opciones de variables a evaluar, por ejemplo, las variables del apoyo al sistema democrático se encuentran únicamente en el *Core A* y las variables de victimización en el *Core B*. Para sortear este problema se utilizó variables proxys que permitan medir las dimensiones especificadas en los cuatro modelos. En general las dimensiones de seguridad, características socioeconómicas y política son más robustas para explicar el apoyo al sistema democrático (26.5%, medido por el R^2), seguida por la Satisfacción con la democracia (24.7%) y en menor medida a la Confianza interpersonal y al apoyo a la democracia (7.3% y 2.4% respectivamente).

28 Córdova (2011) explora otros aspectos como la confianza en las instituciones del sector seguridad y justicia, y la legitimidad política de las instituciones, pero estas no se midieron en la ronda 2021 de LAPOP, únicamente algunas variables y en algunos países, por lo que se excluye el análisis de estos aspectos.

29 Los resultados se presentan siguiendo el formato de revistas académicas, donde se presenta el coeficiente y se indica con (*) el grado de significancia del mismo y entre paréntesis los errores estándar.

Cuadro 2. Predictores del apoyo al funcionamiento de la democracia y la confianza interpersonal en Centroamérica y República Dominicana, 2021.

	(1) Apoyo a la democracia	(2) Apoyo al sistema democrático	(3) Satisfacción con la democracia	(4) Confianza interpersonal
Seguridad				
1. Victimización por delito	-2.886*** (0.895)			-2.634*** (0.869)
2. Percepción de inseguridad en el barrio	-0.0470*** (0.011)			-0.226*** (0.011)
3. Percepción que la seguridad es el problema más grave del país		-2.519*** (0.858)	0.00786 (0.953)	
Socioeconómicas				
4. Índice de posesión de bienes (riqueza)	3.075*** (0.503)	2.461*** (0.375)	-0.266 (0.417)	2.025*** (0.490)
5. Nivel educativo	1.262** (0.500)	-1.598*** (0.341)	-1.062*** (0.379)	2.201*** (0.486)
6. Hombre	-1.670** (0.695)	-4.032*** (0.473)	0.631 (0.526)	0.461 (0.676)
7. Indígena o afrodescendiente	-2.404*** (0.887)	-0.183 (0.596)	0.0352 (0.663)	1.05 (0.860)

	(1) Apoyo a la democracia	(2) Apoyo al sistema democrático	(3) Satisfacción con la democracia	(4) Confianza interpersonal
8. Tamaño del municipio de residencia	-0.180 (0.240)	0.743*** (0.166)	0.387** (0.184)	0.298 (0.234)
9. Residente urbano	0.0960*** (0.025)	0.0114 (0.017)	0.00608 (0.019)	0.0969*** (0.024)
Políticas y de contexto				
10. Los problemas de económicos son los más graves que enfrenta el país	-0.577 (0.710)	0.559 (0.500)	0.325 (0.556)	0.581 (0.691)
11. Percepción de la situación económica personal es mala	-4.102*** (0.712)	-1.970*** (0.490)	-2.708*** (0.544)	-1.476** (0.693)
12. Evaluación del trabajo del presidente		0.247*** (0.009)	0.402*** (0.008)	
13. Satisfacción con la democracia		0.237*** -0.010		
14. Constante	58.21*** (1.985)	34.56*** (1.453)	28.58*** (1.585)	56.88*** (1.924)
Observaciones	8,301	8,196	8,204	8,242
R2	0.026	0.269	0.245	0.073

Fuente: elaboración propia con base en datos de LAPOP (2021 a - f).

*** p<0.01 (significativo al 1%), ** p<0.05 (significativo al 5%), * p<0.1 (significativo al 10%). Errores estándar entre paréntesis.

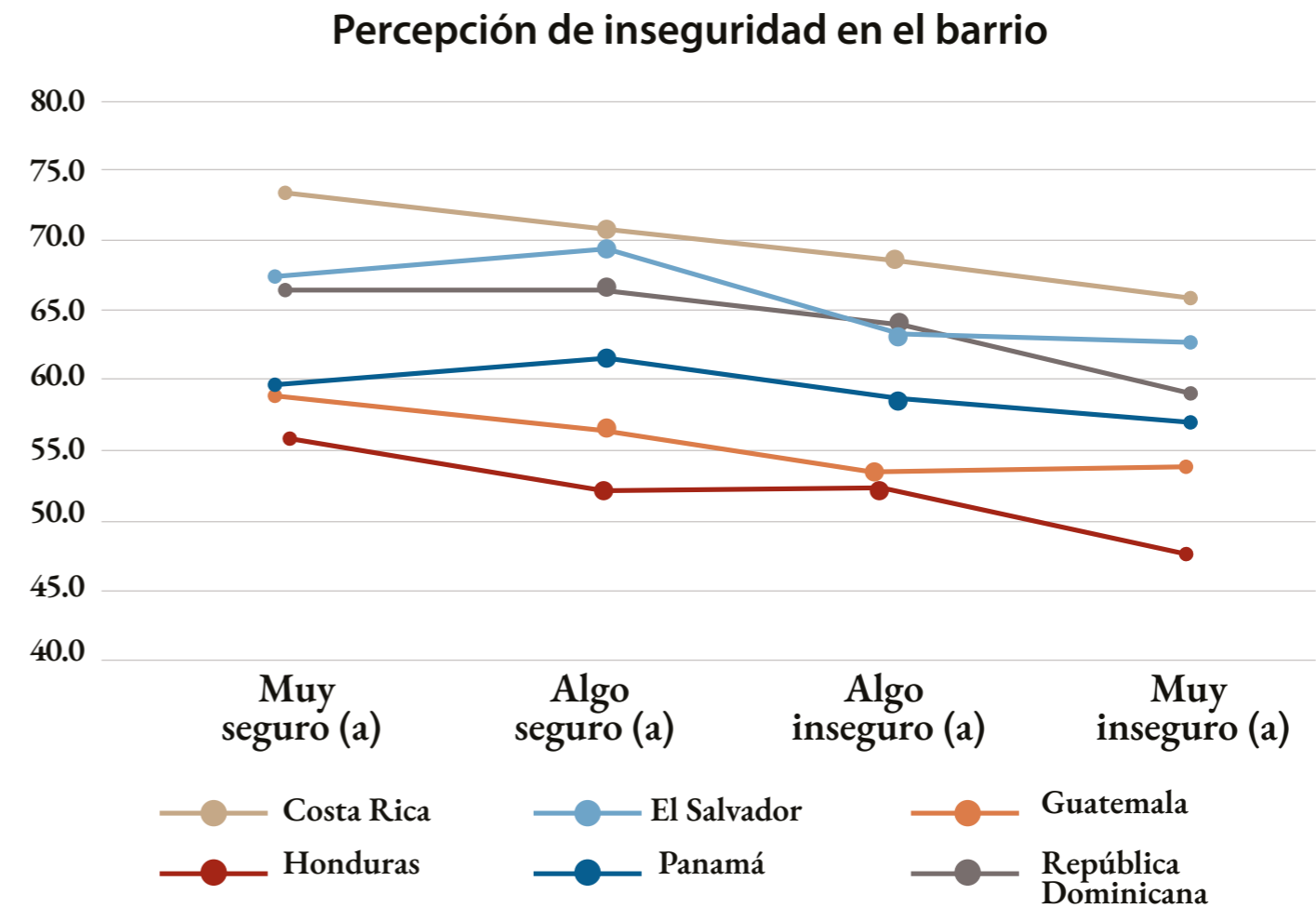
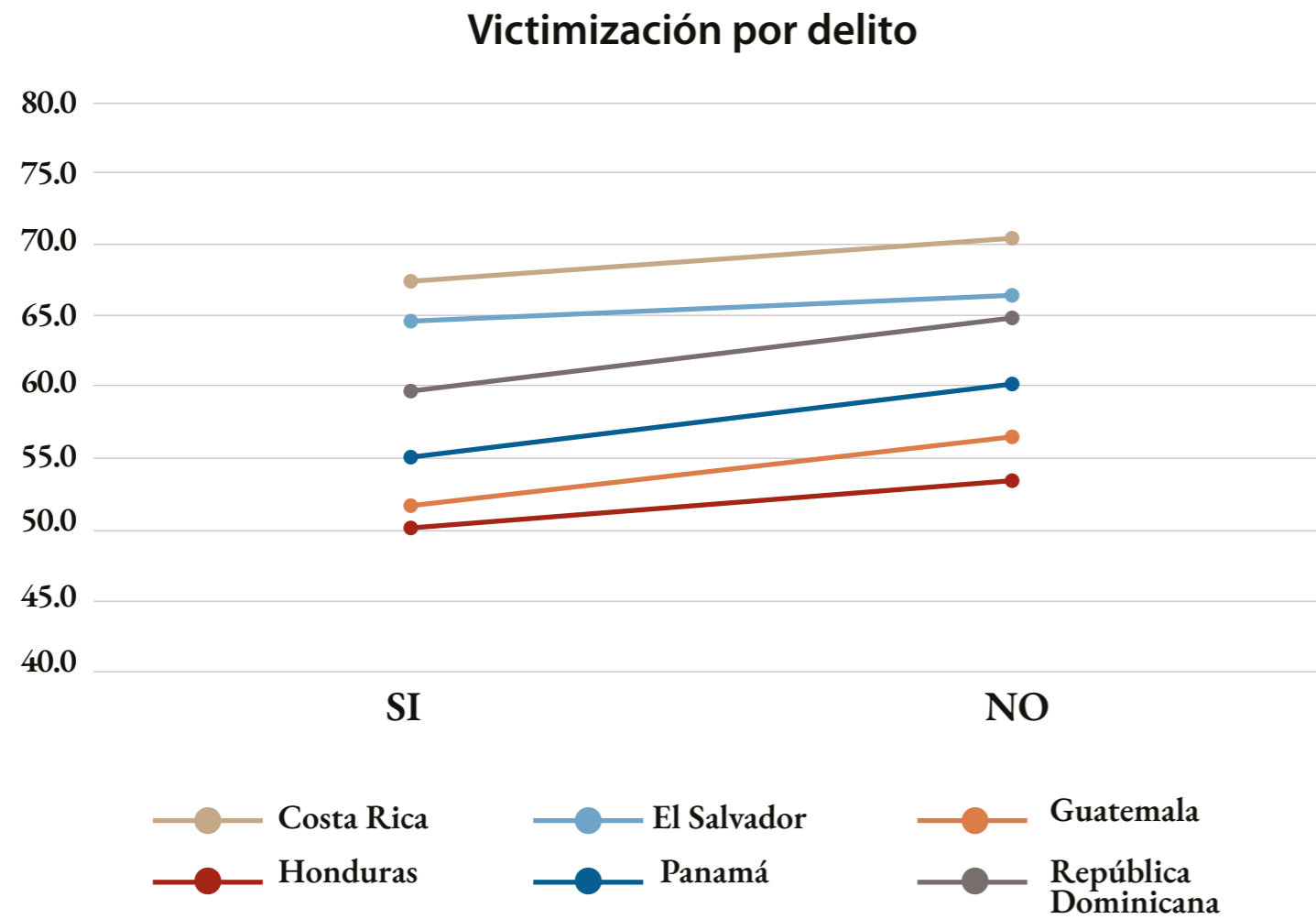
Al analizar la dimensión de seguridad en el modelo MCO, la percepción de inseguridad en el barrio³⁰ y la victimización al delito³¹ reduce el apoyo a la democracia y la confianza interpersonal. Haber sido víctima de un delito en los últimos meses reduce en 2.9 el Índice de Apoyo a la Democracia y en 2.6 el índice de Confianza Interpersonal. Aumentar en un punto el Índice de percepción de inseguridad en el barrio disminuye en 0.05 el apoyo a la democracia y en 0.2 la confianza interpersonal. Finalmente, las personas que consideran que el principal problema del país es la seguridad (delincuencia, consumo de drogas, pandillas, narcotráfico, violencia, entre otros) reducen en 2.5 puntos el apoyo al sistema democrático y no se tiene evidencia estadística que identificar los problemas de seguridad afecten la satisfacción de la democracia de las personas.

Al evaluar el valor promedio del Indicador de Apoyo a la Democracia, este se reduce en 4.5 puntos si la persona ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses (ver gráfico 24a). La disminución del apoyo a la democracia es mayor en República Dominicana (5.5), seguido por Panamá (5.1), Guatemala (4.8), Honduras (3.4) y en menor medida en Costa Rica (3.1) y en El Salvador (2.0). De igual manera el valor promedio del indicador es 6.5 puntos inferior si se compara entre los que perciben que el barrio en el que viven es muy inseguro respecto con los que perciben que es muy seguro (Gráfico 24b.), esta diferencia es mayor en Honduras (8.8), seguido por Costa Rica (8.2) y República Dominicana (7.7) y por debajo del promedio Guatemala (5.5), El Salvador (4.9) y Panamá (3.3).

30 **AOJ11.** Hablando del lugar o el barrio donde usted vive y pensando en la posibilidad de ser víctima de un asalto o robo, ¿usted se siente muy seguro(a), algo seguro(a), algo inseguro(a) o muy inseguro(a)? (1) Muy seguro(a) (2) Algo seguro(a) (3) Algo inseguro(a) (4) Muy inseguro(a). Se recodifica de 0 a 100, donde 0 es muy seguro y 100 muy inseguro.

31 **VIC1EXT.** ... ¿Ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en los últimos 12 meses? Es decir, ¿ha sido usted víctima de un robo, hurto, agresión, fraude, chantaje, extorsión, amenazas o algún otro tipo de acto delincuencia en los últimos 12 meses? Se recodifica y “Sí” tiene el valor de 1 y “No” el valor de 0.

Gráfico 23. Valores promedio del Indicador de Apoyo la Democracia por victimización y percepción de inseguridad en el barrio, 2021.



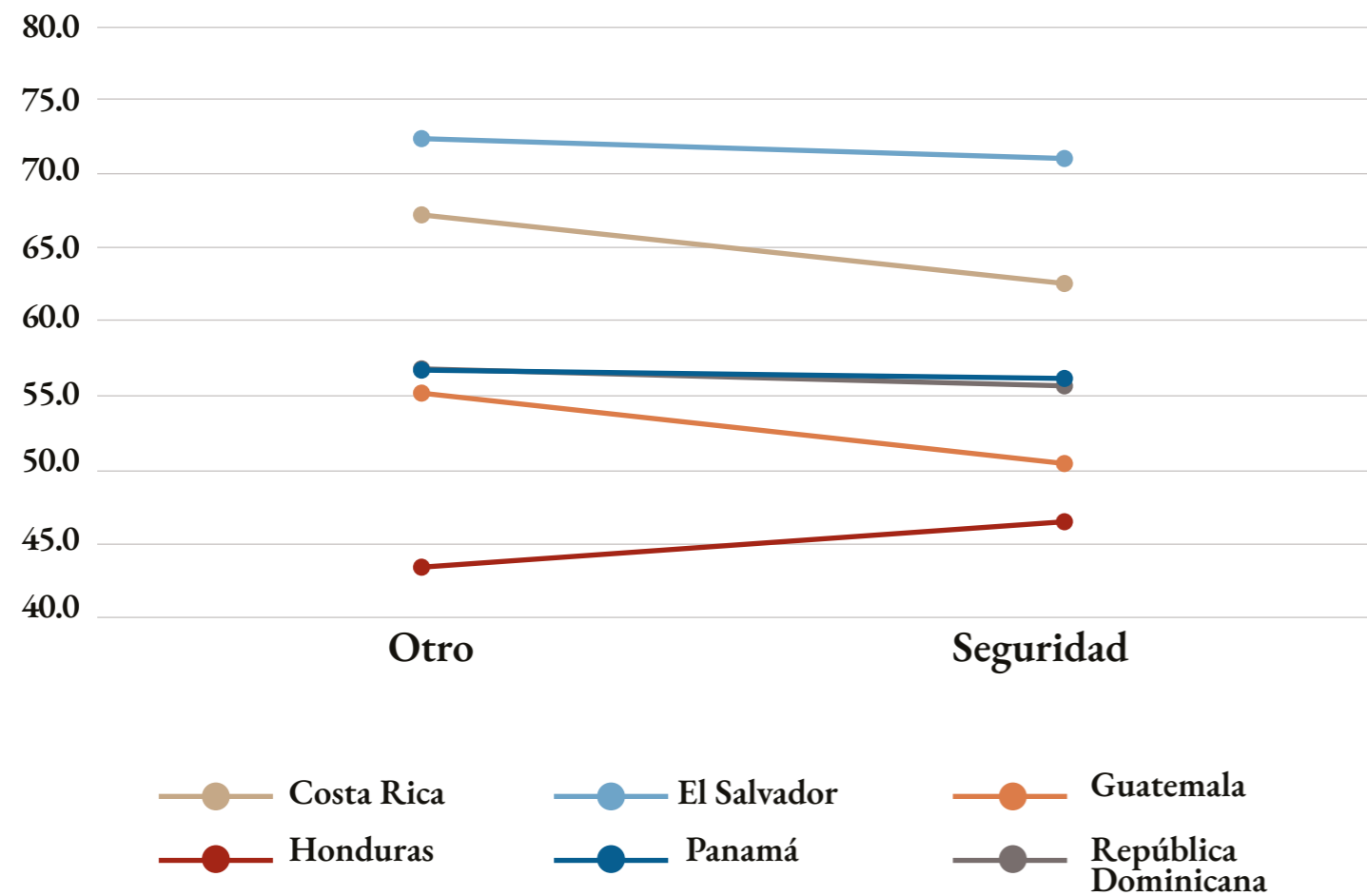
Fuente: elaboración propia con base en datos de LAPOP (2021 a - f).

Al evaluar los valores promedio de los Indicadores de Apoyo al Sistema Democrático y de Satisfacción con la Democracia, el primero es 3 puntos y el segundo es 6.6 puntos inferior si la persona percibe que la seguridad es el principal problema del país comparado con los que perciben que es otro el problema. Al desagregar el Indicador de Apoyo al Sistema Democrático por países las diferen-

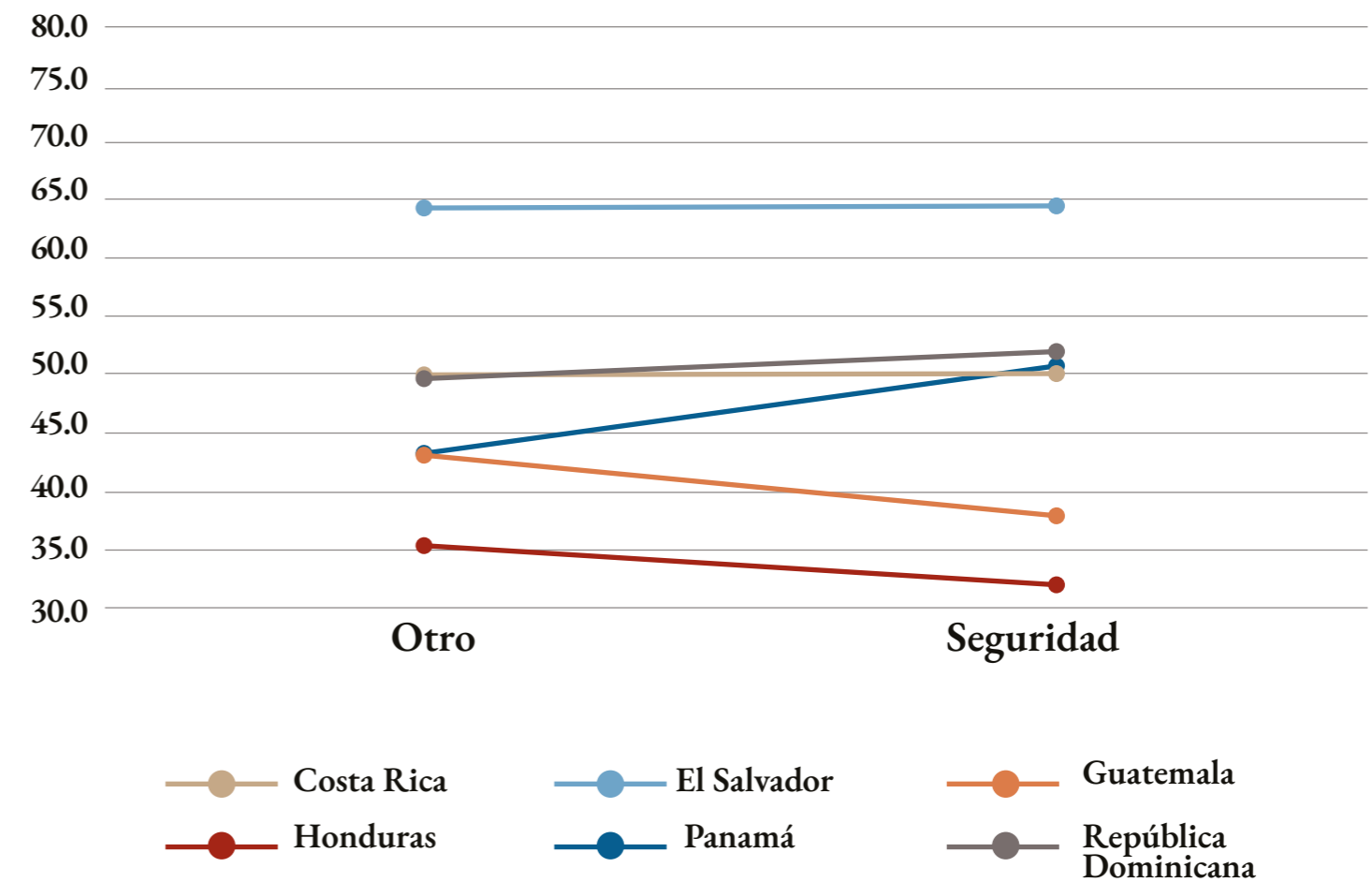
cias no son tan claras de acuerdo a la percepción del principal problema, este es menor en Guatemala (4.8 puntos inferior), Costa Rica (4.7 puntos), El Salvador (1.4), República Dominicana (1.2) y Panamá (0.6), pero en Honduras el valor promedio del indicador es inverso a la percepción del principal problema.

Gráfico 24. Valores promedio de los Indicadores de Apoyo al Sistema Democrático y de Satisfacción con la Democracia por percepción del principal problema del país, 2021.

Apoyo al sistema democrático y percepción que la seguridad es el principal problema del país



Satisfacción con el funcionamiento de la democracia y percepción de inseguridad en el barrio

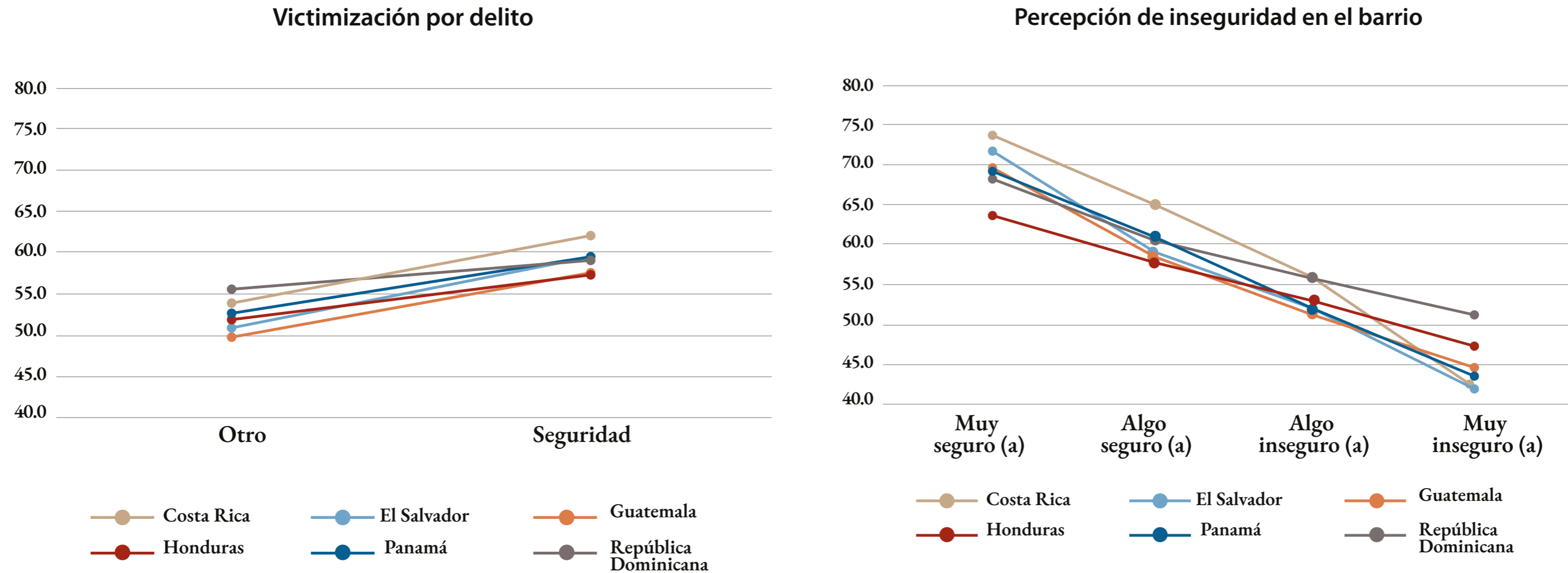


Fuente: elaboración propia con base en datos de LAPOP (2021 a - f).

Por último, al evaluar el valor promedio del Indicador de Confianza Interpersonal, este es 7 puntos menor si la persona ha sido víctima de delito y para aquellos que perciben que su barrio es muy inseguro el indicador es 23.9 puntos inferiores respecto a los que perciben que su barrio es muy seguro. Estas diferencias se mantienen constante en todos los países analizados (ver gráfico 26), para

la percepción de inseguridad del barrio en que se reside, las diferencias son más marcadas para Costa Rica (31.6), El Salvador (29.6), Panamá (26.2) y para Guatemala (25.8). Por debajo del promedio se sitúan República Dominicana (17.3) y Honduras (17.0).

Gráfico 25. Valores promedio del Indicador de Confianza Interpersonal por victimización y percepción de inseguridad en el barrio, 2021.



Fuente: elaboración propia con base en datos de LAPOP (2021 a - f).

La dimensión socioeconómica captura cinco aspectos: la riqueza del hogar, el nivel educativo de las personas, el sexo, si la persona se considera indígena o afrodescendiente³², y el lugar de residencia (medido por si residen en un área urbana o el tamaño del municipio de residencia). En general las personas con mejores condiciones socioeconómicas tienen a expresar mayor apoyo a la democracia, al sistema democrático, la satisfacción con la democracia y mayor confianza interpersonal. De manera específica, aumentar en un punto el Índice de posesión de bienes aumenta en 3.1 el apoyo a la democracia, en 2.5 el apoyo al sistema democrático y en 2.0 la confianza interpersonal. Una situación diferente se obtiene con la educación, al aumentar un nivel educativo, el apoyo a la democracia aumenta en 1.2 y la confianza interpersonal en 2.2, pero por el contrario aumentar un nivel educativo disminuye en 1.6 el apoyo al sistema democrático y en 1.1 la satisfacción con la democracia. Los hombres expresan 1.7 puntos menos de apoyo a la democracia y 4.0 puntos menos de apoyo al sis-

tema democrático respecto a las mujeres y no existe diferencia estadísticamente significativa entre la satisfacción con la democracia y la confianza interpersonal entre ambos sexos. Considerarse indígena o afrodescendiente disminuye en 2.4 punto el apoyo a la democracia, sin embargo, no existe evidencia estadísticamente significativa que el apoyo al sistema democrática, la satisfacción con la democracia o la confianza interpersonal sea diferente entre los que se consideran mestizos o blancos y los que se consideran indígenas o afrodescendientes. Finalmente, residir en las áreas urbanas aumenta en 0.09 el apoyo a la democracia y también en 0.09 la confianza interpersonal, por el contrario, residir en un municipio pequeño o rural aumenta en 0.74 el apoyo al sistema democrático y en 0.39 la satisfacción con la democracia.

En la dimensión política y de contexto se explora cuatro variables proxy: i) percibir que los problemas más graves del país son los económicos no guarda ninguna relación estadística con el apoyo al funcionamiento de la democra-

32 La variable se recodifica a partir de ETID, tomando en cuenta que esta se adaptaba diferente a cada país, para Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá se preguntó: “¿Usted se considera una persona blanca, mestiza, indígena, negra, mulata, u otra? [Si la persona entrevistada dice Afro-costarricense/Afro-salvadoreña/Afro-hondureña/Afro-panameña, codificar como (4) Negra]”; Para Guatemala: “¿Usted se considera una persona ladina, indígena u otra?”; y para República Dominicana “¿Usted se considera una persona blanca, mestiza (india), negra, mulata, u otra?”. Para Honduras la opción mestiza específica “Mestiza o trigueña” mientras que para Costa Rica, El Salvador y Panamá únicamente es “Mestiza”. Se entiende por tanto Afrodescendiente a las personas que se identifican como negra o mulata e indígena a los que se consideraron como tal.

cia ni con la confianza interpersonal; ii) percibir que la situación económica es peor que hace doce meses³³ disminuye en 4.1 el apoyo a la democracia, en 1.9 el apoyo al sistema democrático, en 2.7 la satisfacción con la democracia y en 1.4 la confianza interpersonal; iii) tener una percepción positiva del trabajo del

presidente³⁴ aumenta en 0.2 la confianza en el sistema democrático y en 0.4 la satisfacción con la democracia. Finalmente, un incremento de 1 punto en el Índice de satisfacción con la democracia aumenta en 0.2 el apoyo al sistema democrático.

33 **IDIO2.** ¿Considera usted que su situación económica actual es mejor, igual o peor que la de hace doce meses?

34 **M1.** Hablando en general acerca del gobierno actual, ¿diría usted que el trabajo que está realizando el Presidente Carlos Alvarado Quesada/Nayib Bukele/Alejandro Giammattei/Juan Orlando Hernández/Laurentino “Nito” Cortizo/Luis Abinader es...?: (1) Muy bueno (2) Bueno (3) Ni bueno, ni malo (regular) (4) Malo (5) Muy malo (pésimo). La respuesta se recodifica de 0 a 100, donde 0 es muy malo y 100 muy bueno. Esta pregunta únicamente se realiza para muestra del cuestionario Core A.

3. Conclusiones

Centroamérica y República Dominicana, muestran una caída significativa de la tasa de homicidios en los últimos diez años, la tasa de homicidios por 100,000 habitantes pasó de ser 61.6 en 2011 a 43.1 en 2015, a 20.4 en 2020 y a 18.7 en 2022. La disminución se explica por la fuerte caída de la tasa de homicidios en El Salvador y Honduras, donde las tasas alcanzaron récord de 106.3 para El Salvador en 2015 y de 86.5 para Honduras en 2011. Sin embargo, la prevalencia de la delincuencia ha tendido al alza en la región, pasando de un promedio del 14.8% en 2008 al 19.1% en 2021, las tasas más altas de victimización la experimentaron los hombres, los residentes en las áreas urbanas y las personas indígenas o afrodescendientes. Para 2021, la mayor prevalencia de victimización por delito la experimentó Honduras (25.3%), seguido por República Dominicana (21.2%) y Guatemala (20%), mientras que Panamá (12.8%) mostró la más baja.

Estos datos evidencian que, aunque la tasa de homicidios ha descendido de manera constante, la inseguridad persiste en tanto delincuencia y una diversidad de delitos, por lo que se necesitan encuestas periódicas sobre victimización para conocer más a fondo las tendencias de estos delitos y que estas tomen en cuenta la victimización por violencia basada en género, que suele quedar invisibilizada.

Las estadísticas de la región muestran variaciones importantes luego del fin del confinamiento que los países tuvieron debido a la pandemia por Covid-19. La paralización de actividades afectó el registro de delitos que las instituciones hicieron, pero también generó modificaciones en el comportamiento de estos. Es importante que análisis futuros puedan dar respuestas a los cambios en la tendencia de los delitos que los países están experimentando, donde aquellos de la subregión norte solían presentar los niveles delictivos más altos y ahora van en disminución; así como aquellos países del sur y del caribe que se mantenían en sus niveles bajos, que en los últimos años han experimentado incrementos notables.

Los gobiernos de los países de Centroamérica y República Dominicana, aunque con diversas medidas y enfoques, han implementado estrategias de seguridad ciudadana que privilegian medidas punitivas y represivas. Estas, especialmente en los últimos años en El Salvador, son percibidas por la población como efectivas para disminuir la criminalidad, lo cual genera altos niveles de popularidad a los gobiernos, puesto que las personas perciben que sus problemas de seguridad son resueltos de forma rápida, sin que se dé mucha importancia a las vulneraciones que las medidas puedan causar a algunos grupos poblacionales, o al incremento de la población penitenciaria y en un

grave deterioro en las condiciones de internamiento, como señalan Chinchilla y Vordram (2018).

No obstante, la reducción en las tasas de homicidio de los países de la región para el periodo de 2015 a 2021 (Infosegura, 2022), la percepción de inseguridad en la región se ha incrementado, en 2008 alrededor del 33.5% de la población de la región consideraba que el barrio donde residía era inseguro o muy inseguro, esta proporción aumentó al 41.5% en 2021. Los países que tienen mayor percepción de inseguridad son República Dominicana (48.4%), Honduras (42%) y Guatemala (44.1%), y son las mujeres, los residentes urbanos y los indígenas y afrodescendientes los que perciben más inseguridad en sus lugares de residencia.

Esta mayor percepción de inseguridad y prevalencia del delito ha abonado a que el apoyo a la democracia se haya erosionado en la región en los últimos años. El apoyo a la idea que la democracia es mejor que cualquier otra forma de gobierno se redujo en los países que en 2008 reportaban mayor apoyo a la democracia: Panamá, República Dominicana y Costa Rica, pero también disminuyó en Honduras y Guatemala que ya reportaban menor apoyo. Al apoyo “difuso” a la democracia, es decir al sistema de gobierno, sin enfocarse en un gobierno específico, se mantiene alto para Costa Rica, sin embargo, es bajo para Guatemala, Honduras y Panamá. Finalmente, la satisfacción con la democracia

también ha disminuido, la mayor disminución es en los países que mostraban mayor satisfacción previamente.

Haber sido víctima de un delito o percibir inseguridad en su lugar de residencia disminuye el apoyo a la democracia en la región. El apoyo a la democracia también es menor entre las personas con menos recursos y finalmente tener una percepción positiva del trabajo del presidente aumenta el apoyo a la democracia en la región.

La disminución de las tasas de homicidios es sin duda un hecho fundamental en la mejora de la seguridad en la región, pero en la última década el aumento de la victimización por delincuencia y el aumento en la percepción de inseguridad ha llevado a disminuir la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y en el funcionamiento de esta. Persiste para la región el reto de establecer políticas de seguridad ciudadana capaces de disminuir efectivamente el delito, especialmente para personas en condición de pobreza, y que residan en áreas urbanas y que atiendan las diferencias de género y las necesidades específicas de pueblos indígenas y afrodescendientes. El reto por tanto es implementar medidas basadas en derechos humanos, que fortalezcan el Estado de Derecho y que respondan a la naturaleza multifactorial de los problemas de inseguridad que enfrenta la región.

4. Bibliografía

- Aceña, M. (2022). *Avances y desafíos en la seguridad ciudadana*. <https://cien.org.gt/index.php/avances-y-desafios-en-la-seguridad-ciudadana/>
- AFP. (12 de enero de 2023). *Centroamérica reduce los homicidios violentos en 2022*. France 24. <https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20230112-centroam%C3%A9rica-reduce-los-homicidios-violentos-en-2022>
- Agencia Española para la Cooperación Internacional para el Desarrollo. (s/f) *Programa de fortalecimiento de la administración de justicia y seguridad ciudadana*. <https://aecid.org.pa/?p=2264>
- Aguilar, J. (2019). *Las políticas de seguridad pública en El Salvador, 2003-2018*. San Salvador: Fundación Heinrich Böll-Stiftung
- Alemán, M. (29 de abril de 2019). *El Salvador: tregua de pandillas fue una política de Estado*. AP News. <https://apnews.com/article/6c55c6fd74c04c-db84dbca49284981bc>
- Alianza Américas. (2022). *Qué es un régimen de excepción-El Salvador*. <https://www.alianzaamericas.org/region-centroamerica/que-es-un-regimen-de-excepcion-el-salvador/>
- Arce, A. (15 de abril de 2016). *Tres generales y un cartel: violencia policial e impunidad en Honduras*. The New York Times. <https://www.nytimes.com/es/2016/04/15/espanol/america-latina/tres-generales-y-un-cartel-violencia-policial-e-impunidad-en-honduras.html>
- Arredondo, A. (21 de abril de 2022). *EEUU anuncia formalmente cargos por narcotráfico contra Juan Orlando Hernández*. Voz de América. <https://www.vozdeamerica.com/a/centroamerica-extradicion-hernandez/6539780.html>
- Arroyo Álvarez, Antonio. (20 de abril de 2023). *Seguridad en el país: una respuesta que sigue sin llegar*. UNA Comunica. <https://www.unacomunica.una.ac.cr/index.php/abril-2023/4560-seguridad-en-el-pais-una-respuesta-que-sigue-sin-llegar>
- Banco Interamericano de Desarrollo (2015). *Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica*. <https://www.acnur.org/file-admin/Documentos/BDL/2016/10889.pdf>
- Barómetro de las Américas por LAPOP Lab (2021a). *Cultura política en El Salvador y las Américas 2021* [Base de datos]. Recuperado de: <https://www.vanderbilt.edu/lapop/raw-data.php>

- _____ (2021b). Cultura política en Guatemala y las Américas 2021 [Base de datos]. Recuperado de: <https://www.vanderbilt.edu/lapop/raw-data.php>
- _____ (2021c). Cultura política en Costa Rica y las Américas 2021 [Base de datos]. Recuperado de: <https://www.vanderbilt.edu/lapop/raw-data.php>
- _____ (2021d). Cultura política en Panamá y las Américas 2021 [Base de datos]. Recuperado de: <https://www.vanderbilt.edu/lapop/raw-data.php>
- _____ (2021e). Cultura política en Honduras y las Américas 2021 [Base de datos]. Recuperado de: <https://www.vanderbilt.edu/lapop/raw-data.php>
- _____ (2021f). Cultura política en República Dominicana y las Américas 2021 [Base de datos]. Recuperado de: <https://www.vanderbilt.edu/lapop/raw-data.php>
- _____ (2016a). Cultura política de la democracia en El Salvador y en las Américas, 2016/17 [Base de datos]. Recuperado de: <https://www.vanderbilt.edu/lapop/raw-data.php>
- _____ (2017a). Cultura política de la democracia en Guatemala y en las Américas, 2016/17 [Base de datos]. Recuperado de: <https://www.vanderbilt.edu/lapop/raw-data.php>
- _____ (2016b). Cultura política de la democracia en Costa Rica y en las Américas, 2016/17 [Base de datos]. Recuperado de: <https://www.vanderbilt.edu/lapop/raw-data.php>
- _____ (2017b). Cultura política de la democracia en Panamá y en las Américas, 2016/17 [Base de datos]. Recuperado de: <https://www.vanderbilt.edu/lapop/raw-data.php>
- _____ (2016c). Cultura política de la democracia en Honduras y en las Américas, 2016/17 [Base de datos]. Recuperado de: <https://www.vanderbilt.edu/lapop/raw-data.php>
- _____ (2016d). Cultura política de la democracia en República Dominicana y en las Américas, 2016/17 [Base de datos]. Recuperado de: <https://www.vanderbilt.edu/lapop/raw-data.php>
- _____ (2012a). Cultura política de la democracia en El Salvador y en las Américas, 2012. Recuperado de: <https://www.vanderbilt.edu/lapop/raw-data.php>
- _____ (2012b). Cultura política de la democracia en Guatemala y en las Américas, 2012 [Base de datos]. Recuperado de: <https://www.vanderbilt.edu/lapop/raw-data.php>
- _____ (2012c). Cultura política de la democracia en Costa Rica y en las Américas, 2012 [Base de datos]. Recuperado de: <https://www.vanderbilt.edu/lapop/raw-data.php>
- _____ (2012d). Cultura política de la democracia en Panamá y en las Américas, 2012 [Base de datos]. Recuperado de: <https://www.vanderbilt.edu/lapop/raw-data.php>

- _____ (2012e). Cultura política de la democracia en Honduras y en las Américas, 2012 [Base de datos]. Recuperado de: <https://www.vanderbilt.edu/lapop/raw-data.php>
- _____ (2012f). Cultura política de la democracia en República Dominicana y en las Américas, 2012 [Base de datos]. Recuperado de: <http://Base de datosets.americasbarometer.org/>
- _____ (2008a). Cultura política de la democracia en El Salvador, 2008 [Base de datos]. Recuperado de: <https://www.vanderbilt.edu/lapop/raw-data.php>
- _____ (2008b). Cultura política de la democracia en Guatemala, 2008 [Base de datos]. Recuperado de: <https://www.vanderbilt.edu/lapop/raw-data.php>
- _____ (2008c). Cultura política de la democracia en Costa Rica, 2008 [Base de datos]. Recuperado de: <https://www.vanderbilt.edu/lapop/raw-data.php>
- _____ (2008d). Cultura política de la democracia en Panamá, 2008 [Base de datos]. Recuperado de: <https://www.vanderbilt.edu/lapop/raw-data.php>
- _____ (2008e). Cultura política de la democracia en Honduras, 2008 [Base de datos]. Recuperado de: <https://www.vanderbilt.edu/lapop/raw-data.php>
- _____ (2008f). Cultura política de la democracia en República Dominicana, 2008 [Base de datos]. Recuperado de: <https://www.vanderbilt.edu/lapop/raw-data.php>
- Castellanos, J. y Chinchilla, L. (2022). *Análisis sobre la seguridad ciudadana en el marco del Estado de derecho en Honduras 2000 - 2019: veinte años de frágiles avances. Colección Desarrollo humano par la transformación*. Tegucigalpa: PNUD. <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-06/pnud-hn-coleccion-desarrollo-humano-bloque-fundamentos-10-2022.pdf>
- Chinchilla, L. y Vorndran, D. (2018). *Seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe. Desafíos e innovación en gestión y políticas públicas en los últimos 10 años*. DOCUMENTO PARA DISCUSIÓN N° IDB-DP-640. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. <https://publications.iadb.org/es/seguridad-ciudadana-en-america-latina-y-el-caribe-desafios-e-innovacion-en-gestion-y-politicas>
- Comisión de Asesoramiento y Planificación del Consejo de Seguridad. (2020). *Plan Estratégico de Seguridad de la Nación 2020-2024*. <https://stcns.gob.gt/wp-content/uploads/2022/05/Plan-Estrategico-de-Seguridad-de-la-Nacion-2020-2024.pdf>
- Córdova, R. (2011). *Percepciones sobre la delincuencia e inseguridad en Centroamérica*. Temas de Actualidad No. 12. 1a Edición. San Salvador: Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO).
- Córdova, R., Lupu, N., Rodríguez, M. y Zechmeister, E. (eds.) (2021). *Cultura política de la democracia en El Salvador y en las Américas 2021: Tomándole el pulso a la democracia*. Nashville, TN: LAPOP.

- Cullell, J. (2007). *Informe Estado de la Región 2008. Ponencia acerca de las percepciones de inseguridad en Centroamérica (elementos para la reflexión)*. <https://repositorio.conare.ac.cr:8443/rest/bitstreams/fe4d89cb-5363-4cc9-bbe3-1f1d620395b9/retrieve>
- De León-Escribano, Carmen Rosa. (2010). *La seguridad ciudadana y su impacto en la gobernabilidad y convivencia democrática en Centroamérica*. 1ª ed. San José, C.R.: FLACSO. <https://www.corteidh.or.cr/tablas/28312.pdf>
- Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica. (2016). *Ejecuciones del gobierno a favor de la seguridad ciudadana*. <https://www.cne.gob.do/wp-content/uploads/2016/03/ejecutorias-sobre-seguridad-ciudadana-2016.pdf>
- Ellis, E. (01 de abril de 2023). *Los retos de seguridad en Panamá y la respuesta del gobierno*. Infobae. <https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/04/01/los-retos-de-seguridad-en-panama-y-la-respuesta-del-gobierno/>
- Equipo de “Proceso” UCA El Salvador. (2003). *Plan “Mano Dura” violencia estatal contra las maras*. Revista Envío Digital, N°. 258. <https://www.envio.org.ni/articulo/1283>
- Escotto, T. (2015). *Políticas y prácticas de prevención de la violencia que afecta a la juventud en Centroamérica. Análisis comparativo*. Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL). <https://www.sica.int/download/?-834>
- Fondo para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (F-ODM). (s.f.). *Costa Rica: redes para la convivencia, comunidades sin miedo*. <http://mdgfund.org/es/program/pazcostarica>
- Fondo para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (F-ODM). (s.f.). *Panamá: Mejoramiento de la seguridad ciudadana en Panamá, contribuyendo a la construcción de la paz*. <http://www.mdgfund.org/es/node/862>
- France24. (03 de octubre de 2019). *Honduras, corredor del narcotráfico hacia EEUU por décadas, desde Pablo Escobar hasta “El Chapo Guzmán”*. Agence France Presse.
- Fundaungo (2022). *Encuesta coyuntural noviembre 2022*. Boletín Temático – Diciembre de 2022. San Salvador: FUNDAUNGO. <https://www.fundaungo.org.sv/products/encuesta-coyuntural-noviembre-2022/776>
- García, L. (2022). *Gobierno de Xiomara a los 200 días: promesas cumplidas, pero el silencio también habla*. Revistazo. <https://revistazo.com/gobierno-de-xiomara-a-los-200-dias-promesas-cumplidas-pero-el-silencio-tambien-habla/>
- Hernández, Y., Zamora, A., y Rodríguez, J. (2020). *La victimización. Consideraciones teórico-doctrinales*. Derecho y Cambio Social. No. 61, págs.392-413. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7525025>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2018). *La victimización delictiva en Costa Rica*. <https://infosegura.org/2019/09/20/la-victimizacion-delictiva-en-costa-rica-resultados-encuesta-nacional-de-hogares-2018/>

- Infosegura (2023). *Costa Rica. Análisis sobre homicidios dolosos. Enero- Diciembre de 2022*. <https://infosegura.org/sites/default/files/2023-05/op-cr-homicidios-2022-esp.pdf>
- Infosegura (2022). *Centroamérica y República Dominicana. Análisis sobre la violencia y la seguridad ciudadana. Enero-Diciembre de 2022*. https://infosegura.org/sites/default/files/2023-03/OP_RG_2022_ESP.pdf
- King, Q. (22 de abril de 2016). *El Salvador despliega escuadrón élite antipandillas a zonas rurales*. Insight Crime. <https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/el-salvador-despliega-escuadron-elite-antipandillas-zonas-rurales/>
- Lazala, O. (2018). *Impacto de la inseguridad ciudadana en la cultura política de República Dominicana*. Perspectivas N°1. Friedrich Ebert Stiftung. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fescaribe/14847.pdf>
- Lupu, N., Rodríguez M. y Zechmeister E. [Eds.] (2021). *Pulse of Democracy*. Nashville, TN: LAPOP.
- Martínez, A. y Navarro, J. (2021). *Análisis de las políticas de seguridad ciudadana en El Salvador y su impacto en el incremento de la violencia*. *Estudios de la Paz y el Conflicto*. Revista Latinoamericana, Volumen 2, Número 4, 129-140. <https://www.camjol.info/index.php/ReLaPaC/article/view/11373> Consultado el 24 de abril de 2023.
- Maydeu-Olivares, S. (2016). *La violencia, el talón de Aquiles de Centroamérica*. Notes Internacionales CIDOB, (142). https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionales/n_142_la_violencia_el_talon_de_aquiles_de_centroamerica/la_violencia_el_talon_de_aquiles_de_centroamerica
- Ministerio de Seguridad Pública. *Programa de Cooperación en Seguridad*. (s/f). Programa de Cooperación en Seguridad. <https://www.seguridadciudadana.gob.pa/programa-cooperacion-seguridad-secopa/>
- Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica. (2015). *Plan Nacional de Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social 2015-2018: Articulando el diálogo de la Costa Rica Bicentenaria*. <https://repositorio-snp.mideplan.go.cr/bitstream/handle/123456789/61/PP.005-PN.pdf?sequence=4&isAllowed=y>
- Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica. (2018). *Política penitenciaria científica y humanista*. <https://www.mjp.go.cr/Documento/DescargaDIR/6388>
- Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica. (2015). *Plan Nacional de Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social 2015-2018: Articulando el diálogo de la Costa Rica Bicentenaria*. <https://repositorio-snp.mideplan.go.cr/bitstream/handle/123456789/61/PP.005-PN.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

- Ministerio de Seguridad Pública República de Panamá. *Plan Estratégico Institucional 2022-2030*. https://www.minseg.gob.pa/wp-content/uploads/2022/02/Plan-Estrategico-Institucional-PEI-2022-2030-24-2_compressed.pdf
- Monitor Centroamericano. (2020). *Criminalidad e inseguridad en Honduras. Evaluando la Capacidad Estatal de Reducir la Violencia y Combatir la Criminalidad Organizada*. WOLA, UNAH-IUDPAS. <https://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/08/Crimen-y-Violencia-HN-ESP-8.9.pdf>
- Observatorio de Seguridad Ciudadana. (2013). *Percepción de Inseguridad y Victimización por Crimen en El Salvador 2012*. FUNDAUNGO, FLACSO Programa El Salvador y UTEC. San Salvador, El Salvador. <https://www.fundaungo.org.sv/products/percepcion-de-inseguridad-y-victimizacion-por-crimen-en-el-salvador-2012/44>
- Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2019). *Estudio mundial sobre el homicidio*. Viena: UNODC. https://www.unodc.org/documents/ropan/2021/HOMICIOS_EN_ESPANOL.pdf
- Órgano Judicial de la República de Panamá. (2022). *Programa de fortalecimiento de la administración de justicia y seguridad ciudadana (Fase III)*. <https://www.organojudicial.gob.pa/uploads/blogs.dir/5/2022/08/1/poa-2022-ajustado-a-junio-2022.pdf>
- Ortiz, I. (2012). *Las pandillas transnacionales centroamericanas. VI Congreso de relaciones internacionales*. Universidad Nacional de la Plata. Argentina. http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/40909/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Ortiz M. (2019). *Estrategias de intervención para disminuir la violencia y la delincuencia: avances y desafíos en República Dominicana*. Ciencia y Sociedad, 44(3), 51-67. <https://doi.org/10.22206/cys.2019.v44i3.pp51-67>
- Pastor, M. L. (2016). *Evolución de la seguridad en Centroamérica. El drama de las maras*. Evaluación de la seguridad en Centroamérica (pp. 115-155). <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5673542.pdf>
- Pousset, Celia. 24 de febrero de 2023. *El verdadero estado de excepción en Honduras: capturas arbitrarias, abusos y 49 casos judicializados*. Contracorriente. <https://contracorriente.red/2023/02/24/el-verdadero-estado-de-excepcion-en-honduras-capturas-arbitrarias-abusos-y-49-casos-judicializados/#:~:text=Seg%C3%BAAn%20la%20Divisi%C3%B3n%20de%20Criminolog%C3%ADa,denuncias%20contra%20176%20en%202021.>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2010). *Política Nacional Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz -POL-SEPAZ* <https://www.undp.org/es/costa-rica/publications/polsepaz>

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2011). *Política integral de convivencia y seguridad ciudadana para Honduras 2011-2022*. <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10605.pdf>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2017). *Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana 2017-2030*. <https://www.minseg.gob.pa/wp-content/uploads/2018/09/ENSC%202017-2030%20GACETA%20OFICIAL.pdf>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. (2021). *Análisis sobre la situación de la violencia y seguridad ciudadana Enero a diciembre de 2021*. Infosegura.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. (2022). *Análisis sobre la situación de la violencia y seguridad ciudadana Enero a diciembre de 2022*. Infosegura. https://infosegura.org/sites/default/files/2023-03/OP_RG_2022_ESP.pdf
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. (2022a). *Análisis sobre la situación de la violencia homicida en Guatemala Enero a diciembre de 2022*. Infosegura. <https://infosegura.org/2023/01/27/analisis-sobre-la-violencia-homicida-en-guatemala-2022/>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. (2022b). *Análisis sobre la situación de la violencia y seguridad ciudadana en Honduras Enero a diciembre de 2022*. Infosegura. <https://infosegura.org/2023/01/18/analisis-de-homicidios-y-seguridad-ciudadana-en-honduras-2022/>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. (2022c). *Resumen de situación de seguridad ciudadana en El Salvador Enero a diciembre de 2022*. Infosegura. <https://infosegura.org/2023/02/28/resumen-de-situacion-sobre-seguridad-ciudadana-en-el-salvador-2022/>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. (2022d). *Análisis de homicidios dolosos en Costa Rica*. Infosegura. <https://infosegura.org/2023/02/17/analisis-sobre-homicidios-dolosos-en-costa-rica-2022/>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. (2022e). *Análisis sobre la situación de la violencia homicida Enero-septiembre 2022. República Dominicana*. Infosegura. <https://infosegura.org/sites/default/files/2023-03/OP-Homicidios-ene-sept-2022-RD-ESP.pdf>
- Puerta, F., Aikman, J. y Meyer, M. (2021). *Monitor Centroamericano revela los desafíos y oportunidades para el Estado de Derecho, la seguridad ciudadana y la protección de derechos humanos en el Triángulo Norte de Centroamérica*. The Washington Office on Latin America. <https://www.wola.org/es/analisis/monitor-centroamericano-desafios-estado-derecho-seguridad-ciudadana/>
- Ramírez, L., Cascante, M., y Lucía, A. (2014). *La prevención de la violencia en el centro de las políticas de seguridad ciudadana y prevención de la paz*. Friedrich Ebert Stiftung, Perspectivas 2. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/10714.pdf>

- Redacción. (16 de enero de 2019). *Programa Municipios Más Seguros invierte más de 97 millones de lempiras*. Honduras en sus manos. <http://www.hondurasensusmanos.info/2019/01/16/programa-municipios-mas-seguros-invierte-mas-de-97-millones-de-lempiras/>
- Redacción. (29 de agosto de 2019). *Ejecuciones extrajudiciales en El Salvador: el informe en el que El Salvador reconoce por primera vez está práctica por parte de la policía*. BBC News Mundo. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49504927>
- Redacción. (08 de febrero de 2023). *Alertan sobre el auge de violencia en Panamá*. Prensa Latina. <https://www.prensa-latina.cu/2023/02/08/alertan-sobre-auge-de-violencia-en-panama>
- Redacción. (28 de enero de 2023). *El Salvador: HRW dice haber confirmado violaciones a DDHH*. DW. <https://www.dw.com/es/el-salvador-hrw-dice-haber-confirmado-graves-violaciones-a-dd-hh/a-64543107>
- Sala de Prensa (05 de marzo de 2014). *Fortalecen profesionalización de la fuerza pública*. Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica. https://www.seguridadpublica.go.cr/sala_prensa/comunicados/2014/marzo/CP139.aspx
- Sala de Prensa Casa Presidencial. (24 de noviembre de 2022). *En el tiempo que lleva el Gobierno del Presidente Nayib Bukele el Plan Control Territorial es la mejor defensa del pueblo ante la agresión de las pandillas*. <https://www.presidencia.gob.sv/en-el-tiempo-que-lleva-el-gobierno-del-presidente-nayib-bukele-el-plan-control-territorial-es-la-mejor-defensa-del-pueblo-ante-la-agresion-de-las-pandillas/>
- Sala de Prensa Ministerio del Interior y Policía República Dominicana. (08 de junio de 2022). *Mi país seguro, un plan para combatir la inseguridad desde múltiples ángulos*. <https://mip.gob.do/2022/06/08/mi-pais-seguro-un-plan-para-combatir-la-inseguridad-desde-multiples-angulos/#:~:text=La%20Estrategia%20Integral%20de%20Seguridad,redducci%C3%B3n%20de%20cr%C3%ADmenes%20y%20delitos>
- Sala de prensa Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. (24 de noviembre de 2022). *Gobierno de la presidenta Xiomara Castro declara guerra a la extorsión*. <https://gobiernosolidario.sjgd.gob.hn/3643/gobierno-de-la-presidenta-xiomara-castro-declara-guerra-a-la-extorsion/>
- Sala de Prensa Ministerio del Interior y Policía República Dominicana. (12 de enero de 2023). *Estrategia “Mi país seguro” logra reducir delitos en sectores intervenidos, en algunos hasta cero*. <https://mip.gob.do/2023/01/12/estrategia-mi-pais-seguro-logra-reducir-delitos-en-sectores-intervenidos-en-algunos-hasta-cero/>
- Sistema de Integración Centroamericana, SICA. (2011). *Estrategia de Seguridad de Centroamérica*. <https://www.sica.int/download/?60860>

- The Washington Office on Latin America, WOLA. (2020). *Un camino para la reforma de seguridad ciudadana, la justicia y los derechos humanos en Centroamérica*. <https://www.wola.org/es/analisis/monitor-centroamericano-seguridad-justicia-derechos-humanos/>
- Thomé, H. (2004). *Victimización y cultura de la seguridad ciudadana en Europa*. Tesis Doctoral para optar al título de Doctor en Sociología. Doctorado en Sociología Departamento de Sociología y Análisis de las Organizaciones. Universidad de Barcelona. <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/2866/TOL356.pdf>
- Toledo, J. (s.f.). *Análisis de la victimización desde una perspectiva de género en Barcelona*. Trabajo de fin de grado. Facultad de derecho de la Universidad Pompeu de Fabra. <https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/43447/TFGCRIM1819ToledoLAnalisis.pdf?sequence=5&isAllowed=y>
- Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito del Ministerio de Gobernación de Guatemala / InfoSegura PNUD. (2019). *Encuesta nacional de percepción de seguridad pública y victimización en Guatemala, ENPEVI 2018*. <https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2021/06/01/20210601180831YryvGF2nexIp41WtmnIF0zQRIPoDSFET.pdf>
- Viceministerio de Seguridad del Interior República Dominicana. *Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”*. https://ces.gob.do/dialogo_reformas/12%20Seguridad%20Ciudadana%20y%20Reforma%20Policial/Estrategia%20Nacional%20Integral%20de%20Seguridad%20Ciudadana.pdf
- Voz de América. (05 de diciembre de 2022.) *Honduras decreta estado de excepción en barrios peligrosos*. <https://www.vozdeamerica.com/a/honduras-decreta-estado-excepcion-barrios-peligrosos/6863502.html#:~:text=El%20estado%20de%20excepci%C3%B3n%20es,en%20vigencia%20durante%20un%20mes.>
- Washington Office on Latin America, WOLA. (14 de julio de 2022). *Centroamérica: “El retroceso de la democracia ha sido inmenso”*. <https://www.wola.org/es/analisis/centroamerica-retroceso-democracia/>
- Yates, E. (2011). *Desafíos de la prevención de la criminalidad post-conflicto en Guatemala*. Año 1, Vol. 1, p. 23-54. Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC). <https://www.camjol.info/index.php/RPSP/article/view/1382/1209>

5. Anexos

5.1. Tasas de homicidio

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Costa Rica/a												
Número de homicidios	474	407	411	477	557	578	603	585	564	571	588	656
Tasa por 100,000 habitantes	10.3	8.7	8.7	10.0	11.5	11.8	12.2	11.7	11.2	11.2	11.4	12.6
El Salvador /b												
Número de homicidios	4,371	2,594	2,513	3,921	6,656	5,280	3,954	3,346	n.d.	1,341	1,147	n.d.
Tasa por 100,000 habitantes	70.7	41.8	40.4	62.8	106.3	84.1	63.0	53.1	38.0	21.2	18.1	7.8
Guatemala/c												
Número de homicidios	5,681	5,155	5,253	4,998	4,778	4,521	4,410	3,884	3,578	2,569	2,844	3,004
Tasa por 100,000 habitantes	39.1	34.9	34.9	32.7	30.7	28.6	27.4	23.8	21.5	15.2	16.6	17.3
Honduras /d												
Número de homicidios	7,104	7,172	6,431	5,891	5,148	5,150	3,864	3,732	4,094	3,623	3,941	3,435
Tasa por 100,000 habitantes	86.5	85.5	77.4	69.9	60.0	59.1	43.6	41.4	44.7	38.9	41.7	35.8

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Panamá /e												
Número de homicidios	759	665	666	631	493	421	424	439	480	500	550	501
Tasa por 100,000 habitantes	23.3	17.5	17.3	16.1	12.4	10.4	10.3	10.5	11.3	11.6	12.7	11.4
República Dominicana/f												
Número de homicidios	2,099	1,884	1,641	1,381	1,256	1,207	1,216	1,068	1,026	961	1,172	1,389
Tasa por 100,000 habitantes	21.9	19.5	16.8	14.0	12.6	12.0	12.0	10.2	9.8	9.2	11.1	13.1
Promedio seis países												
Número de homicidios	20,488	17,877	16,915	17,299	18,888	17,157	14,471	13,054	9,742	9,565	10,242	8,985
Tasa por 100,000 habitantes	61.6	52.9	39.8	40.1	43.1	38.6	32.1	28.6	21.0	20.4	21.6	18.7

Fuente: Fuente: elaboración propia sobre la base de:

- a 2011-2021 <https://infosegura.org/sites/default/files/2023-02/OnePager-CR-2021-Homicidios-ESP.pdf>
 2022 <https://infosegura.org/sites/default/files/2023-05/op-cr-homicidios-2022-esp.pdf>
- b 2011-2017 <https://infosegura.org/sites/default/files/2023-02/Evoluci%C3%B3n-anual-de-la-tasa-de-homicidios-TN.pdf>
 2018 <https://portaldetransparencia.fgr.gob.sv/documentos/79-UAIP-FGR-2019.pdf>
 2020-2021 <https://www.seguridad.gob.sv/dia/estadisticas-homologadas/actas-de-la-mesa-de-homologacion-de-las-muertes-violentas/>
 2011-2022 <https://infosegura.org/sites/default/files/2023-03/OP-SLV-2022-ESP.pdf>

- c 2011-2017 <https://infosegura.org/sites/default/files/2023-02/Evoluci%C3%B3n-anual-de-la-tasa-de-homicidios-TN.pdf>
2011-2021 <https://infosegura.org/sites/default/files/2023-02/OPHomicidiosGT-2021-ESP.pdf>
2022 <https://infosegura.org/sites/default/files/2023-05/op-homicidios-2022-gt-esp.pdf>
- d 2011 https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/hn/Boletin_del_Observatorio_de_la_Violencia_IUDPAS_UNAH_Edicion_24.pdf
2012 <https://www.iudpas.org/pdf/Boletines/Nacional/NEd28EneDic2012.pdf>
2013-2022 https://infosegura.org/sites/default/files/2023-05/op-hn-analisis-violencia-seguridad-ciudadana-2022_1.pdf
- e 2011-2020 <https://siec.minseg.gob.pa/phocadownload/ESTADISTICA/INFORMACION/INFORME%20DE%20CRIMINALIDAD%202020.pdf>
2021-2022 https://siec.minseg.gob.pa/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=13:boletines&Itemid=190&limitstart=12
- f 2011-2021 <https://infosegura.org/sites/default/files/2023-03/Analisis-de-SC-RD-2021-ESP.pdf>
2022 <https://cadseci.gob.do/index.php/en/estadisticas/homicidios>

5.2. Correlación entre victimización por delito y percepción de la inseguridad y confianza en las instituciones de gobierno.

Se prueba la correlación entre las variables a estudiar, ello con el fin de determinar si estas se relacionan la una con la otra, se observan las correlaciones y la significancia estadística entre las variables, donde la significancia se encuentra en la segunda fila de cada celda. Como se puede observar en el cuadro de resultados, todas las variables tienen una correlación significativa con la victimización y la percepción de la violencia – a excepción del principal problema de seguridad que consideran las personas -, respecto a la victimización, se puede ver que la variable que tiene una correlación positiva es la confianza en la policía, con un 12.03%, y la percepción de la violencia con una correlación inversa de 19.3%. Respecto a la percepción de la violencia, esta tiene correlaciones más altas con la confianza en la policía, con una correlación inversa del 15.2%, la

protección de derechos con una correlación negativa de 11.3% y la satisfacción con la democracia con el 16.3%.

También se observa que la victimización tiene correlaciones significativas con todas las categorías, por lo que es necesario explorar el comportamiento de estas variables, con una correlación inversa para el nivel educativo de 6% y para el área de residencia con un 9%, y correlaciones positivas para el sexo del 5% y de la categoría ocupacional del 9%, lo cual muestra que, aunque se relacionan de forma débil hay factores categóricos que hacen a las personas más o menos vulnerables. Por otro lado, la percepción de la violencia se encuentra con correlaciones no significativas para el nivel educativo y la categoría de ocupación, pero que, si son importantes el sexo, con una correlación del 4% y el área de residencia con un 7.5%.

PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD Y APOYO A LA DEMOCRACIA EN CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA

	Victimización	Percepción de la violencia	Principal problema del país	Respeto por el gobierno	Protección de derechos	Confianza en la policía	Confianza en el Sistema Judicial	Confianza en el órgano ejecutivo	Confianza en los medios de comunicación	Justicia por mano propia	Satisfacción con la democracia	ing4
Victimización	1											
Percepción de la violencia	-0.193	1										
Principal problema del país	0.0105 0.0633	-0.015 0.0085	1									
Respeto por el gobierno	0.0262 0	-0.046 0	0.0325 0	1								
Protección de derechos	0.0731 0	-0.113 0	0.0142 0.0131	0.3782 0	1							
Confianza en la policía	0.1203 0	-0.152 0	-0.01 0.1097	0.2845 0	0.4028 0	1						
Confianza en el sistema judicial	0.0704 0	-0.106 0	-0.037 0	0.3645 0	0.4951 0	0.4941 0	1					
Confianza en el órgano ejecutivo	0.0753 0	-0.08 0	-0.029 0	0.3151 0	0.3983 0	0.3894 0	0.4358 0	1				
Confianza en los medios de comunicación	0.0425 0	-0.044 0	-0.059 0	0.2684 0	0.2592 0	0.3194 0	0.3371 0	0.3192 0	1 0			
Justicia por mano propia	-0.083 0	0.0914 0	0.0147 0.0502	-0.029 0	-0.025 0.0003	-0.036 0	-0.026 0.0004	-0.05 0	0.0024 0.7176	1		
Satisfacción con la democracia	-0.09 0	0.163 0	-0.016 0.0082	-0.14 0	-0.289 0	-0.233 0	-0.236 0	-0.284 0	-0.159 0	0.0884 0	1	
Democracia mejor forma de gobierno	0.0208 0.0001	-0.066 0	-0.023 0	0.1843 0	0.1446 0	0.143 0	0.1248 0	0.1803 0	0.1737 0	-0.087 0	-0.166 0	1

Fuente: elaboración propia con base en datos de LAPOP lab (2008 a – 2021 f).

5.3. Correlaciones entre la victimización por delito y la percepción de inseguridad características sociales

	Victimización	Percepción de la violencia	Principal problema del país	Respeto por el gobierno	Protección de derechos	Confianza en la policía
Victimización	1					
Percepción de la violencia	-0.1929 0	1				
Nivel educativo	-0.0601 0	0.0095 0.1538	1			
Sexo	0.0525 0	0.0431 0.0002		1		
Área de residencia	-0.09 0	0.0746 0	0.1425 0	0.022 0.0546	1	
Categoría de ocupación	0.0898 0	-0.0053 0.3151	-0.1561 0	0.3869 0	-0.0396 0	1

Fuente: elaboración propia con base en datos de LAPOP lab (2008 a – 2021 f).

5.4. Resumen de estrategias de seguridad ciudadana por país

Guatemala

Guatemala no estuvo exenta de los conflictos armados en los que varios países de la región centroamericana se vieron involucrados durante gran parte del siglo XX, a pesar de los procesos de paz y de las reformas encaminadas a la democratización y desmilitarización de la sociedad, en 1997 se creó la Policía Nacional Civil, se redujo el número de efectivos del ejército y se le retiró de las funciones policiales internas, sin embargo, debido al aumento de los índices de violencia desde el 2000, los militares volvieron a ejercer funciones encaminadas a la seguridad ciudadana. A partir de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, las políticas públicas de seguridad ciudadana en Guatemala tuvieron también un componente de movilización comunitaria. La reforma realizada a la policía, incluyó la creación de una red de juntas locales de seguridad, así como también el Viceministerio de apoyo comunitario cuyo enfoque era primordialmente preventivo y de trabajo conjunto entre los sectores de la sociedad (Yates, 2011).

Los efectos del conflicto armado en Guatemala impactaron de forma particular el tejido social del país, muchas personas se vieron desplazadas, familias fueron desintegradas, las relaciones entre las personas y comunidades fueron modificadas; y todo esto es visto como factores asociados a la violencia posconflicto. Otros elementos mencionados son la exclusión social, la impunidad por la incapacidad de las instituciones de hacer cumplir la ley y sancionar el delito.

Todo esto ha llevado a que la población sea víctima de diversas formas de violencia en su cotidianidad (Ibid.).

De acuerdo a la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) como parte del Plan de Modernización del Ejército de Guatemala, en 2004 el Estado estableció un máximo de 15,500 efectivos dentro del Ejército. Este Acuerdo ha sido reformado varias veces, una de las reformas más relevantes fue en 2011, el cual eliminó cualquier restricción en el número de efectivos en las Fuerzas Armadas. En 2015 el Estado aprobó la creación de los “Escuadrones del Cuerpo Especial de Reserva para la Seguridad Ciudadana” (CERSC), el cual años después, se cambió el nombre de los escuadrones a “Batallones Estratégicos de Reservas Militares” (WOLA, 2020).

Asimismo, como parte de los compromisos adquiridos por Guatemala en el Plan Alianza para la prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica impulsado por el gobierno de los Estados Unidos en 2016, se dio prioridad al fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, realizando, entre otros aspectos, la formación de agentes de seguridad, la transparencia del Ministerio y mejor administración financiera (Ibid.).

En el año 2015, se formuló el Libro Blanco de Seguridad: Guatemala 2025 con Seguridad y Desarrollo, como expresión de una mayor identidad e integra-

ción del Sistema Nacional de Seguridad, lo cual permitió, la definición de conceptos, por medio de un proceso participativo, para lograr un entendimiento compartido de las características complejas de la seguridad. El Sistema, ha mantenido un proceso de retroalimentación, a través de las diferentes evaluaciones de avances, realizadas desde el año 2013. En estas evaluaciones se identificaron factores de éxito, la mayor coordinación y un alineamiento progresivo de los resultados reportados por cada institución. El alineamiento de las políticas sectoriales a la Política Nacional de Seguridad, se ha manifestado principalmente en la Política de Defensa de la Nación, aprobada en el año 2013; la cual fue concebida para complementar las funciones del Sistema Nacional de Seguridad.

De acuerdo con Aceña (2022), la implementación de las estrategias en seguridad ciudadana ha permitido que “tanto la Policía Nacional Civil (PNC) como el Ministerio Público hayan avanzado en el fortalecimiento institucional, como por ejemplo la creación de la División Nacional contra el Desarrollo de Pandillas (DIPANDA) y la Fiscalía contra la Extorsiones, ambas con sedes departamentales y municipales. También INACIF, IDPP y el Organismo Judicial han tomado medidas para reducir las extorsiones, pero el Sistema Penitenciario (SP) no ha logrado implementar una estrategia de reclusión efectiva para contrarrestar las extorsiones”.

Honduras

En 2001, el gobierno hondureño aprobó la Ley de Prevención, Rehabilitación y Reinserción de Personas Vinculadas a Pandillas, que establecía la

creación de centros de atención especializada, con un fuerte componente de rehabilitación y reinserción. Esta ley aunque es una iniciativa diferente a las políticas represivas para hacer frente a la violencia generada por las pandillas, no contó con el apoyo suficiente sobre todo en el ámbito financiero. A esto se agregaba la falta de políticas que reforzaran el marco legal, la falta de voluntad política para apostar a medidas de largo plazo para resolver los problemas de seguridad (Ortiz, 2012).

De acuerdo al Monitor Centroamericano (2020), en Honduras entre 2010 y 2017 “se emitieron más leyes en materia de seguridad que en los primeros 23 años del retorno al orden constitucional en 1982” (p.12). Esto responde por supuesto, a los altos niveles de violencia y delincuencia registrados pero también, a la respuesta de carácter reactiva y militarista frente a esto por parte de los diferentes gobiernos. Además, se mencionan otras características de estas normativas, como son la priorización del vínculo entre seguridad y defensa, así como el impedimento de la contraloría a través de la creación de legislación que restringe el acceso a información pública.

En este sentido, en 2011 se aprobó la Ley de Seguridad Poblacional que buscaba obtener recursos para reforzar los presupuestos del sector seguridad, defensa y justicia. Los fondos recabados priorizaron el fortalecimiento de los órganos policiales y militares, por sobre los judiciales. Parte de la crítica que recibió esta legislación fue la poca transparencia en el uso de los fondos. En ese mismo año, se aprobó la Ley Especial del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa (CNDS), creando el órgano rector de las políticas en materia de seguridad, defensa nacional e inteligencia. Este Consejo es el que tiene el poder de

decisión en el manejo de los fondos establecidos en la Ley de Seguridad Poblacional. Sumado a esto, en 2013, con la creación de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, el CNDS dejó de estar sujeto a fiscalización y auditoría (Ibid.).

En la última década han sido abundantes las estrategias que desde los Gobiernos centrales se han implementado para contrarrestar los altos índices de violencia e inseguridad que se han experimentado en el país. Durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) se elaboró la “Política integral de convivencia y seguridad ciudadana para Honduras 2011-2022”, y entre las medidas se incrementó la cantidad de efectivos policiales y militares en tareas de seguridad ciudadana a partir de la creación de fuerzas de seguridad especiales como: Estrategia Interinstitucional en Seguridad y Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES) y la Policía Militar del Orden Público, la cual no tuvo una aceptación positiva por parte de amplios sectores de la población debido a las experiencias de abuso de autoridad y participación en bandas criminales por parte de miembros de las fuerzas de seguridad.

Además, Honduras fue parte de la implementación del Proyecto Regional “Municipios Más Seguros” auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2012), el cual que tiene por objetivo: *“mejorar la convivencia y la seguridad de los ciudadanos en todos los municipios de Honduras, fortaleciendo el trabajo en equipo entre el Gobierno Central, las instituciones responsables en los temas de seguridad y justicia y las administraciones municipales del país”*. Este ha sido implementado en tres municipios del país (Redacción, 2019, Las intervenciones).

En el ámbito de las instituciones de seguridad pública éstas han estado en constante reforma en la búsqueda de fortalecer los marcos institucionales y realizar reestructuraciones que permitan el saneamiento de las filas de agentes de seguridad que históricamente se han visto envueltos en casos de corrupción y de pertenencia a bandas criminales (Arce, 2016). Tal es el caso de las Reformas a la Policía Nacional, que de acuerdo con Castellanos y Chinchilla (2022), *“a pesar de los esfuerzos que se han realizado estos han sido insuficientes e incompletos debido a que han respondido a momentos de crisis dentro de la institución y no a una visión estratégica de renovación y reforma”* (p. 53).

No han sido pocas las denuncias realizadas acerca del involucramiento de representantes del gobierno hondureño en casos de corrupción y vínculos con el narcotráfico en las diferentes instituciones públicas, evidenciada en las acusaciones hacia diferentes figuras políticas de estar implicados en las redes de crimen organizado y narcotráfico que han mantenido el estado de violencia e inseguridad en el país (France24, 2019).

De acuerdo a Arredondo (2022), de entre las acusaciones que más impacto han generado, ha sido la realizada por parte de Estados Unidos al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022) presentada por el secretario de Justicia en Estados Unidos, Merrick Garland. El gobierno estadounidense lo acusa de *“abusar de su posición como mandatario para convertir al país en un “narco-Estado”, utilizando dinero del narcotráfico para financiar sus campañas y comprar votos y traficando 50 toneladas de cocaína”* (párrafo 1). “Hernández se enfrenta a tres cargos criminales, uno por conspirar para impor-

tar cocaína a Estados Unidos y otros dos por uso y conspiración para el uso de armas de fuego, como parte de una conspiración de narcotráfico” (párrafo 3).

El gobierno actual, presidido por Xiomara Castro de Zelaya ha iniciado con amplias dificultades al asumir el reto de encaminar un proceso para la construcción democrática, a partir del fortalecimiento de las instituciones, los marcos legales y de estado de derecho que sufrieron un grave retroceso durante los gobiernos presididos por Juan Orlando Hernández. Sin embargo, las medidas en materia de seguridad durante su mandato ha sido el incumplimiento de sus promesas de campaña en la que figuraban: formar una policía comunitaria y eficaz y despolitizar el sistema de seguridad y justicia (García, 2022).

Sin embargo, en noviembre de 2022, anunció un estado de emergencia y excepción parcial en el país debido a los altos índices de violencia generada por el crimen organizado y las pandillas quienes generan actos delictivos relacionados con el tráfico de drogas, armas, asesinatos, extorsión y narcotráfico, sin embargo, el Decreto Ejecutivo determina que *“el pueblo hondureño sigue siendo víctima de la violencia desenfrenada que afecta en particular a través del delito de extorsión”* (Decreto Ejecutivo PCM 29-2022, p. 2). La medida permite que se restrinjan la libertad de movimiento y reunión de los habitantes, así como a ingresar en los hogares y realizar arrestos sin tener una orden judicial.

De Acuerdo con el analista en seguridad, Raúl Pineda Alvarado:

Lo que se ha aplicado en Honduras es un remedo, una acción que carece en cantidades mínimas de las cualidades a un proyecto que, si bien es cierto, es autoritario, ha demostrado su eficacia y donde el Gobierno de El Salvador

ha invertido una cantidad muy fuerte de recursos (Voz de América, 2022, párrafo 13).

El Salvador

En el caso particular de El Salvador, la elaboración de políticas públicas de seguridad ciudadana se ha basado, principalmente, “en acciones de carácter represivo con poca atención a la prevención y reinserción” (Martínez y Navarro, 2021, p. 132.). La implementación de políticas públicas encaminadas al combate de la inseguridad ha sido utilizada como estrategia por parte de los partidos políticos para asegurar el triunfo en las elecciones, incluso influyendo en la opinión pública bajo la narrativa de la lucha contra las pandillas, que se ha mantenido en la actualidad (Martínez & Navarro, 2021).

Fue durante los gobiernos del Partido ARENA que las políticas públicas en seguridad ciudadana centraron sus esfuerzos en el combate a las pandillas ejecutando acciones encaminadas a las reformas del Código Penal y Código Procesal Penal para endurecer las penas carcelarias, así como disminuir la edad de los jóvenes para que pudieran ser juzgados como adultos, además, a pesar de los esfuerzos encaminados a limitar el accionar de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, se dio inicio a la realización de tareas conjuntas entre la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Armada para la búsqueda y captura de pandilleros (Equipo de “Proceso” UCA, 2003).

A pesar de que estas estrategias fueron criticadas tanto por la sociedad

civil como por el partido izquierdista FMLN, durante los gobiernos de Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019)) se continuó ejerciendo la mano dura como enfoque principal en las acciones de seguridad ciudadana. Las políticas públicas implementadas durante los gobiernos de izquierda contaban también con un componente de estrategia integral y preventivo, por ejemplo: la creación de los Comités Municipales de Prevención de la Violencia (CMPV) como parte de la Estrategia Nacional de Prevención Violencia (2009) cuyo objetivo era *“ser una instancia constituyente de un espacio democrático y participativo, donde a partir del liderazgo del gobierno municipal, serán articuladas diferentes organizaciones sociales”* (Reglamento CMPV, art. 4)³⁵ y, que ha funcionado en algunos municipios para la articulación de esfuerzos encaminados en la prevención de la violencia. Además, se llevaron a cabo otras estrategias más polémicas como la denominada “tregua entre pandillas”, que buscaba disminuir la tasa de homicidios entre el 2012 y 2015³⁶ (AP News, 2019, párrafo 1). Esta negociación experimentó un rompimiento que volvió a elevar el número de homicidios en el país. (Ibid.)

El “Plan El Salvador Seguro” (2015) tenía el objetivo de implementar una serie de estrategias encaminadas en el descenso de homicidios priorizando la

implementación de las mismas en los 50 municipios más violentos a nivel nacional. Si bien, estas medidas fueron positivas para el descenso de la violencia homicida reconfiguró el mapa de la violencia, ya que, huyendo de las medidas, las pandillas emigraron de las ciudades a las áreas rurales por lo que se desplegó hacia las zonas rurales una unidad élite de soldados y policías denominada “Fuerza Especial de Reacción El Salvador” (FERES) (King, 2016).

Estas estrategias de despliegue de mano dura de parte de las fuerzas policiales, así como la implementación de las “Medidas extraordinarias de seguridad (2016), que tenían por objetivo neutralizar a las pandillas tanto a lo interno de los centros penitenciarios como en los territorios de operación permitieron el abuso de poder por parte de los mismos quedando evidenciados en el “Informe de la Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca de su misión a El Salvador” donde se compilan 116 víctimas de ejecución extrajudicial lo que conllevó a que las fuerzas especiales de reacción fueran disueltas de la Policía Nacional Civil (Redacción, 2019, párrafo 8).

Las estrategias de seguridad en el país continúan apostando al uso de la fuerza y a las estrategias de lucha frontal contra las pandillas evidenciado en el “Plan Control Territorial, PTC” (2019), que cuenta con cinco “fases” o es-

35 Reglamento para los Comités Municipales de Prevención de la Violencia. (s/a) <https://www.transparencia.gob.sv/institutions/ciudad-delgado-san-salvador/documents/480102/download>

36 “En 2012, los líderes de la Mara Salvatrucha MS13 y Barrio 18 hicieron un pacto para disminuir la cifra de muertes por violencia porque en esa época se registraban al menos 14 fallecimientos al día. Para facilitar el acuerdo y ayudar a que los cabecillas de las pandillas pudieran comunicarse con sus estructuras en las calles, las autoridades tomaron la medida de removerlos del penal de máxima seguridad conocido como Zacatraz y enviaron a otras cárceles de mediana seguridad en las que se asegura que gozaron de todas las facilidades para seguir operando (Alemán, 2019).

trategias de implementación (Sala de Prensa Casa Presidencial, 2022, párrafo 6). La fase cuatro del PCT denominada “Incurción” a través de operativos de incurción para la captura de personas que han cometido delitos, ha sido una de las más controvertidas ya que ha sido durante su implementación que se ha declarado Régimen de Excepción³⁷ desde marzo de desde la comunidad internacional se han elaborado informes que visibilizan las violaciones a los derechos humanos que estas medidas han generado (Redacción, 2023, párrafo 1).

Costa Rica

En la última década factores como el narcotráfico y el crimen organizado se consideran como las principales problemáticas para el aumento de los índices de violencia en Costa Rica. Las estrategias de seguridad ciudadana han sido elaboradas bajo un enfoque de construcción de la cultura de paz y convivencia ciudadana. Para ello, las estrategias de seguridad ciudadana han implementado acciones de carácter preventivo y de fortalecimiento de los entornos comunitarios, como la creación del programa “Redes para la Convivencia Comunidades Sin Miedo (2009-2013)”, programa implementado en los nueve cantones más

inseguros del país cuyo objetivo era la disminución de los índices de violencia y el temor a través de tres estrategias: 1. desarrollar de planes locales de convivencia y prevención de la violencia en cinco cantones de intervención. 2. Fortalecer las redes de organizaciones civiles que contribuyen a la reducción de la violencia 3. Promover más de 30 proyectos dirigidos por adolescentes y jóvenes (Fondo para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, F-ODM, s.f).

Asimismo, como parte de los resultados del Programa “Redes para la Convivencia Comunidades Sin Miedo (2009-2013)” durante el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014) se elaboró el Plan Nacional de Prevención de la Violencia, Promoción de la Paz y de la Seguridad Ciudadana (POLSEPAZ, 2010), como estrategia para la disminución de los índices de violencia que tenían una tendencia al alza desde el 2009. POLSEPAZ fue elaborado a partir de un amplio proceso de consulta nacional involucrando tanto a las entidades de Gobierno, partidos políticos, sector empresarial, sindicatos, opiniones de expertos y juventudes organizadas. La visión estratégica de POLSEPAZ se centró en definir lineamientos de acciones a nivel institucional, nacional y local con resultados a corto, mediano y largo plazo centrandose sus lineamientos en la prevención de la violencia y la promoción de cultura de paz (Loría et, al., 2014).

37 “La Constitución de la República de El Salvador establece el Régimen de Excepción para responder a circunstancias extremas, tales como guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o graves perturbaciones del orden público. El Régimen de Excepción permite que se suspendan las libertades de movimiento, expresión, asociación, e inviolabilidad de las comunicaciones. Además, la Asamblea Legislativa puede suspender algunos elementos del derecho a la defensa y de la privación de libertad” (Alianza Américas, 2022).

Entre los logros obtenidos a partir de las estrategias implementadas ha sido la disminución en la incidencia de delitos, la promoción del concepto de paz social y el desarrollo de programas enfocados en la atención de personas jóvenes como: La Red Nacional de Jóvenes para la Prevención de la Violencia, Programas de Cultura, Arte, Recreación y Deporte (ESTRATEGIA CARD), El programa CONVIVIR, y los Centros Cívicos para la Paz. Asimismo, en los gobiernos locales y las comunidades se fortalecieron las capacidades para la prevención de la violencia y se crearon las Casas de la Justicia que son centros de mediación y resolución de conflictos en las comunidades (Ibid.).

Durante el gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018) se elaboró una nueva estrategia en materia de seguridad ciudadana Plan Nacional de Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social 2015-2018: Articulando el diálogo de la Costa Rica Bicentenario, siguiendo con un enfoque de prevención de la violencia y promoción de la cultura de paz (Ministerio de Justicia y Paz, 2015, p. 12).

A pesar de las estrategias implementadas la tasa de homicidios en Costa Rica ha experimentado un alza, por lo que desde el actual gobierno presidido por Rodrigo Chaves (2022) anunció la “Operación Costa Rica Segura” como respuesta a la que se presenta como una crisis de seguridad esta estrategia está enfocada en fortalecer las estrategias de persecución del delito por lo cual se ha establecido como medida excepcional el despliegue de 9,500 efectivos policiales durante seis meses, asimismo, se plantea el reclutamiento de nuevos policías y la compra de más patrullas, cámaras portátiles para policías, control de muni-

ciones y operativos de alto impacto. Además de estas medidas, desde el Poder Ejecutivo se presentaron iniciativas de Ley como la extradición de nacionales involucrados en delitos de narcotráfico y crimen organizado, así como propuestas para realizar intervenciones económicas y la reforma del sistema penitenciario nacional, este tipo de medidas (Arroyo, 2023).

Panamá

Aunque Panamá es uno de los países que cuenta con los niveles más bajos en el índice de criminalidad siguen manteniendo una tasa de homicidios elevada, y delitos como la violencia doméstica y la violencia hacia la mujer han ido incrementándose. En algunos territorios panameños se concentran grupos pandilleros a los que se les atribuyen los índices de violencia e inseguridad. Un primer esfuerzo para disminuir los índices de violencia se realizó mediante la implementación del programa denominado “Mejorando la seguridad ciudadana en Panamá (2009-2013), que tuvo por resultados: 1. La creación del Observatorio de Seguridad Ciudadana, 2. El fortalecimiento institucional a partir de capacitación del personal de las entidades de seguridad ciudadana en materia de gestión de políticas públicas de seguridad ciudadana, 3. Se crearon Comités de seguridad ciudadana en dos localidades del país y 4. Se crearon redes de jóvenes contra la violencia con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención de la violencia en este grupo etario (Fondo para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, F-ODM, s.f.).

Durante el periodo presidencial de Juan Carlos Varela (2014-2019), se elaboró la estrategia en materia de seguridad denominada “Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana 2017-2030”, la cual contó con el apoyo técnico del PNUD-Panamá. Contemplaba un enfoque de trabajo local desde la estructuración de observatorios locales que les permitiera contar con datos e información para alimentar el sistema de monitoreo permanente y evaluación de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana (ENSC) (M. Espinoza, P. Pérez, comunicación personal, 20 de marzo de 2023).

Estos esfuerzos en materia de seguridad estuvieron articulados en el Programa de Cooperación en Seguridad (SECOPA) el que tenía por objetivo mejorar la convivencia ciudadana proporcionando apoyo estratégico para la creación de un marco institucional sólido y permanente de seguridad ciudadana desde el cual se articulaban las actividades para dar cumplimiento los ejes estratégicos planteados en la ENSC.

Otros esfuerzos encaminados en el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones en materia de seguridad ciudadana se han llevado cabo a partir de la implementación de programas desde la Cooperación Internacional como ser el “Programa de Fortalecimiento de la Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana”, el cual ha tenido tres fases de desarrollo desde el 2011 a la actualidad, desde donde se realizaron acciones para la prevención de la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, mejora el sistema de administración de justicia en materia de acceso a la justicia, mejora al Sistema de formación, promoción y especialización de la Policía Nacional con perspectiva

de género y atención a grupos vulnerables, fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios que intervienen en el marco del nuevo Sistema Penal Acusatorio (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, s/f). La tercera fase iniciada en 2022 estuvo enfocada en el apoyo a la implementación de la Carrera Judicial en el Órgano Judicial (Órgano Judicial, 2023, p.1).

El narcotráfico, el crimen organizado, los flujos migratorios son de los principales factores que mantienen los índices de violencia en Panamá al alza. En 2023 se observó un incremento en los niveles de violencia en algunas zonas donde operan estos grupos criminales, parte de las acciones llevadas a cabo desde el Ministerio de Seguridad han sido el despliegue de más de efectivos policiales, el Servicio Nacional Aeronaval y del Servicio Nacional de Fronteras (Redacción, 2323).

Ante este panorama de aumento de las problemáticas en materia de seguridad desde las agencias de seguridad inscritas al Ministerio de Seguridad mantienen operaciones de vigilancia en las zonas de mayor conflicto, específicamente en la zona de tránsito de migración irregular en El Darién y en las zonas fronterizas con Colombia y Costa Rica, así como en el Canal de Panamá. Asimismo, se están elaborando sistemas de control fronterizo más eficaces con apoyo de la organización International Narcotics and Law Enforcement (INL) y la Customs and Border Protection (CBP). Además, se está realizando inversión en la compra de buques de patrulla costera y aeronaves de detección (Ellis, 2023).

República Dominicana

Desde el 2013 la tasa de homicidios en República Dominicana tuvo un descenso en comparación con la década anterior, sin embargo, los niveles de violencia e inseguridad se han mantenido como una de las principales problemáticas que afectan a la sociedad. De acuerdo a los datos de la Procuraduría General de la República, para el 2015, entre las principales causas de homicidios asociados a la delincuencia correspondieron a 455 y los no relacionados con la delincuencia fueron 822. De los homicidios por causas de la delincuencia corresponden a robos y asaltos y en menor medida a tráfico de drogas. Entre los homicidios no relacionados responden a riñas, feminicidios y homicidio accidental (Ortiz, 2019).

Ortiz (2019) señala que el Plan de Seguridad Democrática (PSD) (2004) “fue uno de los principales proyectos de nación, enfocado en brindar a la población el acceso a sus derechos fundamentales, principalmente a las personas residentes en zonas marginadas” (p. 62) en República Dominicana llevando a cabo diferentes programas enfocados a la prevención de la violencia, por ejemplo: Programa Barrio Seguro que tenía por acciones brindar microcréditos a personas emprendedoras, así como asegurar el acceso a la salud, fomentar actividades culturales y recreativas, habilitó centros de enseñanza y recuperó el liderazgo social en las comunidades de implementación.

Durante el gobierno de Danilo Medina (2012-2020) se implementó “El

Plan Nacional de Seguridad Ciudadana” que tenía por objetivo reducir los índices de violencia en el país, para lo que en el año 2015. Se autorizó que más de 2,000 efectivos policiales y militares realizaran patrullajes a nivel nacional cifra que posteriormente se incrementó a 5,000 efectivos y fue reforzado con la integración de 1,800 policías recién salidos de la academia, la colaboración de 1,709 militares que fueron diseminados a nivel nacional, a los que se sumaron entre 650 y 700 nuevos integrantes de los cuerpos castrenses (Dirección de Análisis, Información y Programación Estratégica (DIAPE, 2016).

Asimismo, se impulsó una reforma institucional a la Policía Nacional con el objetivo de sanear las filas castrenses, separando a más de 3,000 efectivos por mala conducta, aceptación de sobornos, y estar involucrados en bandas criminales. Además, se impulsó la profesionalización de la carrera policial y se promovieron procesos de formación en prevención e investigación de crímenes. Se fortaleció el marco institucional en materia de seguridad con la creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Ibid.).

Dentro de los programas ejecutados para la prevención de la violencia se creó el “Programa Vivir Tranquilo” desde donde se implementaron subprogramas enfocados en desarrollar actividades culturales, artísticas y deportivas y se brindó asistencia de necesidades como salud, educación y vivienda (DIAPE, 2016).

Aunque los esfuerzos encaminados en brindar soluciones a los problemas de inseguridad que enfrenta el país el narcotráfico, la proliferación de armas de

fuego, la violencia contra la mujer y la delincuencia común siguen generando altos índices de victimización y de percepción de inseguridad en el país. En el 2021, el actual gobierno presidido por Luis Abinader inició la implementación de La Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro” cuyo objetivo se plantea “mejorar de forma gradual la seguridad de los ciudadanos y disminuir así la percepción de inseguridad con el respaldo de los planes de desarrollo económico y social del país, a través de reducción de crímenes y delitos”, las acciones de la Estrategia se han realizado priorizando los territorios con mayor

tasa de falta de convivencia pacífica y mayor tasa de homicidios (Sala de Prensa Ministerio del Interior y Policía República Dominicana, 2022).

Entre las acciones implementadas en los territorios priorizados se encuentran la asignación de nuevos agentes de seguridad y equipos obteniendo como resultado la reducción de los homicidios. Como parte de las acciones de carácter preventivo se han realizado talleres de capacitación a líderes mediadores en soluciones de conflicto (Sala de Prensa Ministerio del Interior y Policía República Dominicana, 2023).

6. Sobre las personas autoras

Wendy María Alas

Psicóloga por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”. Actualmente es investigadora independiente con más de 10 años de experiencia en temáticas relacionadas a seguridad ciudadana, migración, desplazamiento forzado, y desarrollo digital.

Alejandra Quintanilla

Maestra en Política Económica por la Universidad Nacional de Costa Rica, es investigadora junior en el Programa de Estudios de Políticas Públicas de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo. Sus áreas de investigación abarcan la violencia contra las mujeres, seguridad social y políticas sociales, destacándose por su compromiso y enfoque riguroso en estos temas cruciales.

Manuel Alfonso Delgado Chavarría

Maestro en Desarrollo Económico de la Universidad de Sussex y economista por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, es Coordinador de Estudios sobre Políticas Públicas en la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo. Es experto en políticas públicas sociales y de protección social en Centroamérica y en la aplicación de métodos cuantitativos para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas. Sus áreas de investigación son seguridad ciudadana, salud, educación y protección social.

Percepción de la seguridad y apoyo a la democracia en Centroamérica y República Dominicana

Autoras: Wendy Alas, Manuel Delgado y Alejandra Quintanilla

Centroamérica y República Dominicana enfrentan importantes desafíos para garantizar la seguridad ciudadana en sus respectivas sociedades. Si bien muchos de los retos son comunes, El Salvador, Guatemala y Honduras se han caracterizado por mayores tasas de homicidio, victimización por delito y mayor percepción de inseguridad que Costa Rica, Panamá y República Dominicana. A pesar de las diferencias entre los países, los niveles de victimización por delito han aumentado en toda la región y de igual manera se ha empeorado la percepción de seguridad por parte de sus ciudadanos.

Este documento se estructura en tres grandes apartados, el primero resume los principales conceptos de seguridad en el análisis, la evolución reciente de las tasas de homicidio en la región y las principales respuestas estatales en materia de seguridad pública. El segundo analiza, a partir de los datos de LAPOP lab, la evolución de la victimización por delito, percepción de seguridad y confianza en las instituciones democráticas en la región, finalizando con un análisis multivariado de los determinantes del apoyo a la democracia. El tercer apartado resume las principales conclusiones.



ISBN: 978-9977-68-365-2

